

BOLETIN DE NOTICIAS
COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID
 Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59
 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 297		FECHA: 15 de noviembre de 2019
SUMARIO		
PAÍS	CONTENIDO	PÁG.
AMÉRICA LATINA	ESTADOS UNIDOS EL CONTUMAZ SANCIONADOR	2
	LA VUELTA AL NEOLIBERAISMO	4
	LAS VENAS ORGANICAS DE AMERICA LATINA Y EL DESAFIO DE LAS RECETAS NEOLIBERALES	6
CHILE	CHILE EN LLAMAS: EL NACIONALISMO HERIDO DONDE NACIÓ	10
	CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE CHILE	12
ECUADOR	PROMESAS Y DISPUTAS POR LA PEPITA DE ORO	14
HAITÍ	LA CRISIS EN HAITÍ ALCANZA NUEVAS DIMENSIONES	19
	COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE HAITÍ.	21
HONDURAS	LA PRESENCIA DE LA CONTRA EN HONDURAS FUÉ UN PROYECTO IMPERIAISTA.	22
	CIRCULA “EL FANTASMA DE HEZBOLÁ” EN LA FRONTERA HONDURAS-NICARAGUA	27
MEXICO	ENTREVISTA A MARICHUY- DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIDERESA INDIGENA	28
VENEZUELA	MACRI RECONOCE COMO EMBAJADORA A LA REPRESENTANTE DE GUAIDÓ	30

AMÉRICA LATINA

ESTADOS UNIDOS EL CONTUMAZ SANCIONADOR

El gobierno de Estados Unidos, cuyo ejecutivo está en manos del multimillonario Donald Trump, está empeñado en aislar política y económicamente a Moscú impulsando para ello, continuas sanciones contra el gigante euroasiático y presionando a sus aliados a seguir tal conducta.

Un objetivo que ha tenido su etapa de desarrollo desde el año 2014 y cuyos intentos han resultado fallidos. Tal resultado, inaceptable para halcones y asesores belicistas de Estados Unidos, ha significado redoblar los esfuerzos de Washington en una verdadera “guerra sucia” donde la presión política, diplomática, comunicacional, se une a la coacción derivada del amplio uso que realiza en el ámbito de las sanciones sobre los sectores productivos, energéticos, bancario y financiero ruso. Unido al ataque, igualmente, sobre el sector de la defensa y economía de la federación rusa. No han faltado en esta política operaciones de inteligencia e incluso atentados de falsa bandera para acusar a los servicios de inteligencia rusa de atentados con neurotoxinas o a las fuerzas aeroespaciales estacionadas en Siria.

De Moscú a Teherán

La política de Estados Unidos, destinada a impedir las relaciones constructivas de la Federación Rusa con la comunidad internacional, tiene su correlato también contra otros países, sujeto a la desatada e irracional política de sanciones, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la República Islámica de Irán, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, Siria y todo aquel que se oponga a los afanes hegemónicos de un Estados Unidos, que no se resigna a perder preeminencia en el concierto internacional. Un periplo de prohibiciones, penas, castigos, puniciones y todo lo que pueda salir de una política imperial decidida a castigar y que va desde Moscú a Teherán, de Damasco a Caracas, de La Habana a Pyong Yang.

Para las autoridades iraníes, país sometido a intensas presiones, sanciones y ataques desde el triunfo mismo de la revolución el año 1979 señala que “Mientras Irán responde con diplomacia en su política exterior, Estados Unidos, en esta vía, usa las sanciones, el terrorismo económico y las guerras”. Altas autoridades de Irán y Rusia, ante la política de fuerza establecida por estados Unidos contra ambos países han señalado que es necesario abogar “por fortalecer las cooperaciones entre los dos países para desafiar las sanciones de EE. UU”. En reunión sostenida en Turkmenistán el pasado mes de agosto, el Primer Ministro ruso Dimitry Medvedev junto al vicepresidente primero de Irán, Eshaq Yahanguiri, insistieron en la necesidad de acelerar las cooperaciones económicas entre ambos países “Teherán y Moscú deben reducir su dependencia de las divisas externas en las transacciones y los intercambios bancarios. ...EE. UU. está intentando aumentar sus presiones contra Irán y Rusia, pero Teherán y Moscú deben actuar conscientemente en los lazos comerciales y cooperaciones económicas” señaló Medvedev.

Los Estados Unidos y sus aliados, principalmente europeos, agrupados en la Unión Europea, más Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá entre otros, han llevado a cabo una campaña de promoción, para intensificar estas acciones ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, no aprobados, en absoluto, en las instancias que la propia comunidad internacional se ha dado, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que las relaciones entre Washington y la Unión Europea, se han deteriorado con Rusia a partir del año 2014 cuando Crimea se separó de Ucrania y se adhirió a Rusia a través de un referéndum en el que más del 96 por ciento de los habitantes de la península apoyaron la incorporación a la Federación Rusa. Los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, instan activamente a que el resto de los países también se sumen a estas conductas ay prácticas de bloquear, a

gran escala los activos rusos en el extranjero, lo que contraviene las leyes internacionales y socava, evidentemente, el sistema económico internacional.

En ese plano no es casual que países como Rusia, Irán, China que sufren estas conductas sancionatorias busquen alternativas para avanzar en sus propios objetivos de desarrollo, como también en abrir camino a el uso de monedas que no sean el dólar, de tal manera de ir restando preeminencia a la principal arma de extorsión y chantaje que posee Washington. La prueba más clara de ese camino alternativo, al impuesto por Washington, es el que están transitando Rusia e Irán que trabajan en la interacción del sistema ruso de transferencias y el iraní Sepam en sustitución del sistema SWIFT, para así eludir sanciones de terceros países, según declaraciones dadas a los medios internacionales el pasado 13 de septiembre, por el asesor presidencial ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov. "Para proteger los lazos comerciales y económicos bilaterales ante las sanciones de terceros países se toman medidas sobre la ampliación de pagos directos, el uso de divisas nacionales, el mejoramiento de la interacción del sistema ruso de transferencias financieras y el iraní Sepam como alternativa a los pagos a través de SWIFT" sostuvo Ushakov.

Washington ha establecido un conjunto de medidas sancionatorias, destinadas a socavar a importantes empresas estatales rusa ligadas, en forma principal, del sector energético ligadas al petróleo y el gas como son Gazprom, Lukoil, Rosneft y Transneft. Sanciones, acciones desestabilizadoras, presiones financieras, prohibición de comerciar en el mercado mundial, incluso operaciones de sabotaje suponen una amenaza directa en materia de seguridad energética, no sólo para Rusia, sino también un grupo de importantes países europeos – entre ellos Alemania, Austria, Polonia, Bulgaria, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Hungría, Francia, Italia, Serbia, Grecia, Eslovaquia, República checa en incluso la propia Ucrania que dependen de la compra de gas y petróleo ruso en porcentajes mayoritarios de sus adquisiciones– como también países latinoamericanos ligados, ya sea en la compra de recursos hidrocarburíferos, como proyectos de inversión para explotar en conjunto estas riquezas naturales.

En el caso de Latinoamérica, esas sanciones se han expresado tanto con la estatal petrolera venezolana PDVSA como la petrolera estatal rusa, definidas, tanto por el gobierno ruso, como el venezolano y los directivos de estas gigantes del petróleo mundial “como actos ilegales “. Rosneft declaró, a través de un comunicado hecho público el día 10 de septiembre pasado que “cualquier esfuerzo de Washington por frenar sus ingresos en Venezuela constituye un acto ilegal. Estados Unidos está utilizando la amenaza de las sanciones como una forma de competencia desleal, además que todas las operaciones que realiza con crudo en Venezuela se llevan a cabo en el marco de los pactos rubricados antes de que Washington le impusiera sanciones a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Empresas petroleras privadas rusas como es el caso de Lukoil, la segunda en ventas de Rusia y con reservas multimillonarias, también sufren las amenazas de Washington y sus socios que la han obligado a suspender operaciones tanto en Irán como en Venezuela. Esta decisión de interrumpir actividades en ambos países se anunció el año 2018, dos semanas después de que la compañía petrolera francesa Total retrocediera también ante las presiones de Estados Unidos a las empresas que mantienen lazos económicos con el país persa. Con Gazprom – la mayor empresa gasífera estatal rusa – cuenta con 456 mil empleados y ventas anuales que superan los 160 mil millones de dólares. Una empresa sometida a fuertes presiones, que tratan de sacarle del teatro de operaciones europeo. Prueba de ello ha sido la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que impide a la empresa rusa Gazprom utilizar toda la capacidad del gasoducto Opal, para así reducir la presencia del consorcio gasífero ruso en territorio europeo, para dar entrada al GNL de los Estados Unidos que ha quintuplicado sus ventas a Europa generando ahora una dependencia con Washington.

La realidad de las relaciones de Washington con los países que no son aliados, ni entran en la categoría de sumisos y que levantan la bandera de la soberanía, como es el caso de aquellos mencionados en este artículo: Rusia, Irán, Venezuela, son muestra que la casta política, militar y aquella del complejo militar industrial estadounidense no va a aceptar que alguien se escape de sus pretendidos objetivos hegemónicos. Así, el gobierno estadounidense utiliza un amplio arsenal de métodos, estrategias, políticas desestabilizadoras, técnicas ilegales, operaciones de falsa bandera, presiones, sanciones, bloqueos, embargos, congelamiento de activos, el robo descarado de las reservas de estos países, usando en ello la complicidad temerosa de países europeos, timoratos y con temor de sufrir el chantaje violento del que se supone es su socio.

Washington es un violador permanente de la legalidad internacional y para ello actúa con impunidad pues cuando un organismo internacional trata de llamarlo al orden amenaza de inmediato con suspender su aporte financiero. Si un país desea transitar por un camino de desarrollo económico y político propio, Estados Unidos usará toda la artillería de agresividad que caracteriza a la nación estadounidense. Las presiones financieras, el uso manipulador y desinformador de sus medios gráficos, televisivos, radiales, de redes sociales, así como los asesinatos políticos, agresiones, y apoyo a sus famosas revoluciones de colores. Ese es el menú de opciones que ofrece Estados Unidos al mundo, muy alejado de ese mito de supuesto faro democrático del mundo occidental, devenido en realidad, en un referente de violador del derecho internacional.

(Fuente: Pablo Jofré Leal. <https://www.hispantv.com/noticias/opinion/438073/eeuu-sanciones-bloqueo-rusia-trump-iran>).

LA VUELTA AL NEOLIBERAISMO

En el continente latinoamericano se conocen los años 90 del siglo pasado como “la década perdida”. Fueron los años de aplicación de las medidas más ortodoxas del neoliberalismo, generalmente camufladas tras la denominación de ajuste estructural. Se habían ensayado desde los años 70 aprovechando la implantación de dictaduras (Chile, Argentina...) que imposibilitaron la contestación a esas medidas ante la desaparición y muerte de las oposiciones políticas, sociales y sindicales.

En la década de los 80, con la aplicación del modelo de la transición española, gran parte de las dictaduras se fueron transformando por arte de birlibirloque en democracias reconocidas. Aquellas mismas élites militares y económicas (oligarquías) que hasta semanas antes habían dirigido con mano de hierro y gatillo fácil a las sociedades, se reconvertían en demócratas. El quiz de la cuestión era que, por supuesto, las estructuras de la economía neoliberal que ya había dado sus primeros pasos en las dictaduras, no se podían tocar. Demócratas sí, pero nunca dispuestos a perder su estatus de dominación y privilegios sino, muy al contrario, a ensayar nuevas formas que multiplicaran sus beneficios.

Y así América Latina entra en una fase de ajustes estructurales en esa década perdida. Recortes sociales y laborales, precarización del trabajo, subidas de impuestos a las capas populares y bajada de la fiscalidad a las clases dominantes, adelgazamiento del estado mediante despidos masivos y disminución de las arcas públicas, acompañadas de privatización de la práctica totalidad de los sectores económicos estratégicos (electricidad, minerías, telefonía, hidrocarburos...). Todo ello, produce un inmediato hundimiento de la calidad de vida de las grandes mayorías, calidad que nunca había sido buena pero que ahora empeora ostensiblemente, incluyendo las expectativas del futuro inmediato.

Con esta situación es relativamente fácil entender que la entrada al nuevo siglo viniera acompañada de un nuevo ciclo caracterizado por la conflictividad social y política que se traducirá en la elección democrática de los llamados gobiernos progresistas en gran parte del continente latinoamericano. Las sociedades habían concluido la década exhaustas y empobrecidas y el oasis neoliberal era cuestionado por éstas, e incluso

por fuerzas políticas afines a la moderación política y a tendencia liberales. Casi nadie podía seguir defendiendo un régimen neoliberal que había supuesto convertir a América Latina en el territorio del mundo donde la desigualdad social se había multiplicado hasta niveles nunca vistos, pese a la enorme cantidad de recursos naturales y las posibilidades del continente de construir una vida más justa para la mayoría de su población.

Hoy, hacemos un salto en el tiempo y encontramos una realidad de discursos que hablan de que el ciclo de los gobiernos progresistas ha sido un fracaso y se ha acabado. Los últimos años han traído una presión redoblada sobre éstos en todos los ámbitos. Se ha utilizado desde el golpe de estado hasta el boicot económico, desde la presión de los mercados hasta el sabotaje y la manipulación mediática. Y encontramos nuevamente victorias de fuerzas neoliberales que, además, vienen reforzadas con discursos ultraderechistas, corruptos, racistas y machistas, como es el caso de países como Brasil, Guatemala, Honduras o Argentina.

Estos breves antecedentes permiten entender las fuertes oposiciones que ya se articulan en Brasil, la posible derrota electoral de Macri y su neoliberalismo en Argentina y, sobre todo, el levantamiento en Ecuador. En este último país la población vive un auténtico “deja vu”, esa sensación que una persona siente a veces de haber vivido anteriormente una misma situación o experiencia. El llamado “paquetazo”, es decir las medidas neoliberales anunciadas por el gobierno de Lenin Moreno han devuelto a la población ecuatoriana a la década perdida. Ha sido un auténtico shock. El aumento de los combustibles en un 123% con todo lo que eso supone de inmediato aumento de los precios de todos los productos esenciales para la vida, el despido masivo de funcionarios y la culpabilización a éstos de la situación, la privatización posible de la seguridad social y, entre otras consecuencias, la consiguiente desaparición de las perspectivas de una posible jubilación; en suma, la pérdida de derechos sociales y laborales. Y todo ello acompañado de nuevas exenciones fiscales y reducción de impuestos a las clases más altas y a la inversión extranjera, es decir, a las transnacionales que volverán a copar los territorios (poco importan la crisis climática) para una extracción desenfrenada de los recursos naturales del país.

Ecuador vuelve a entregarse al mejor postor a través de las medidas que una vez más impone el FMI (Fondo Monetario Internacional) a cambio de una ayuda para tratar de dar viabilidad a la maltrecha economía. Sin embargo, esa ayuda supone el automático mayor endeudamiento del país y la supeditación absoluta a las directrices dictadas por ese organismo internacional, abanderado del neoliberalismo más ortodoxo, con lo que esto supone de pérdida de soberanía. Organismo que sigue aplicando las mismas recetas que fracasaron estrepitosamente respecto a la mejora de las condiciones de vida de la población durante la década perdida; aunque también hay que tener en cuenta que esas medidas nunca pretendieron esto último sino el aumento de beneficios de las élites económicas locales y transnacionales. Este es el deja vu que explica el levantamiento popular en Ecuador, con un protagonismo recuperado del movimiento indígena que, como en los años 90 del siglo pasado, concentra fuerza y movilización gracias a la memoria corta que supone tener muy presente el empobrecimiento que las recetas neoliberales supusieron para un país con enormes recursos naturales y que, sobre todo, no quiere repetir la historia. Como ha señalado la profesora de la Universidad de Valencia Adoración Guamán los pueblos ecuatorianos se han encontrado con un “neoliberalismo por sorpresa”, traído por un presidente que gobierna en sentido totalmente contrario al programa que propuso en elecciones. Y esto por si solo explica la protesta social.

(Fuente: Jesus González Pazos@jgonzalezpazos. Miembro de Mugarik Gabe.
Telesur 11 octubre 2019)

LAS VENAS ORGANICAS DE AMERICA LATINA Y EL DESAFIO DE LAS RECETAS NEOLIBERALES

Como era previsible, la oposición no respeta los resultados y convoca por estas horas a sus adeptos a desconocer el triunfo y la reelección de Morales Ayma. Invocan fraude, que igualmente vociferarían ante cualquier resultado adverso, en primera o segunda vuelta. Al escapárseles esta última de las manos, el tenor se vuelve violento y golpista.

En el legislativo, el Gobierno pierde su amplia supremacía de dos tercios, pero conserva la mayoría en ambas cámaras.

Con esta victoria ganan los sectores más pobres de Bolivia, el campesinado, los trabajadores y la clase media baja en proceso de empoderamiento social. Celebran también con júbilos en los distintos rincones de América Latina y el Caribe las fuerzas de la izquierda y el progresismo.

Luego del lógico desgaste de un período de más de trece años de gobierno, la emergencia de una nueva generación en Bolivia, la guerra sucia de noticias falsas de muy mal gusto, la exacerbación secesionista y racista, la aparición de un candidato evangelista de ultraderecha y el trabajo de zapa conspirativo de los tentáculos de Estados Unidos, ¿cuál es la clave del nuevo triunfo del primer presidente de origen indígena y campesino de Bolivia?

Las venas orgánicas del Proceso de Cambio

La legitimidad democrática de la victoria del binomio gubernamental no está sólo dada por la matemática electoral exigida (más del 40% y diferencia de 10% con el segundo) sino por el apoyo y representatividad que confieren al gobierno las organizaciones sociales campesino-indígena y obreras. Las primeras, agrupadas inicialmente en el Pacto de Unidad, luego en la CONALCAM, representan al arco íntegro de la ruralidad discriminada, alejada hasta el 2006 de toda decisión e incidencia en las políticas públicas.

Estas fueron las fuerzas que constituyeron el grueso de la resistencia al último tramo – neoliberal - de una explotación de siglos. Constituyen a su vez, el complejo organismo popular que dio vida a una revolución plurinacional y soberana, que devolvió dignidad cultural en el intento de ampliar las fronteras democráticas de un estado racista y plutocrático, enajenado por la oligarquía y servil al interés multinacional.

La potencia de las organizaciones campesino-indígenas está relacionada con una matriz demográfica cuyo modo de vida y memoria histórica exhibe fuertes trazos comunitarios. Si bien hoy ya el 70% de la población boliviana vive en medios urbanos, la migración interna ha trasladado aquella estructura mental a los sectores periféricos de las ciudades.

Por su parte los obreros, mayoritariamente representados por la Confederación Obrera Boliviana (COB), son la memoria viva de la larga y dolorosa lucha de mineros y otros sectores fabriles para superar la vejación y adquirir los más elementales derechos humanos. Herederos de la Revolución nacionalista del '52, completan el conglomerado de sublevados que, con apoyo a veces muy crítico, forman parte del entramado popular que sustenta al Proceso de Cambio.

La legitimidad popular de Evo Morales tiene mucha relación con sus orígenes pobres y campesinos, pero se funda sobre todo en su trayectoria como dirigente social cocalero y constructor de la unidad campesino-indígena de todas las regiones y su instrumento político MAS-IPSP. Herramienta a través de la cual estas orgánicas lograron ocupar espacio institucional y tener incidencia en las políticas públicas.

Asimismo, Evo Morales ha cumplido el papel de mediar en la tensión urbano-rural y establecer un equilibrio inestable entre la cultura originaria del Buen Vivir y las ansias de desarrollo humano dependientes del avance de una economía anteriormente muy precaria. Paradoja que aumenta si se piensa que esta inédita revolución basó el triunfo electoral de este domingo en premisas de estabilidad y crecimiento.

Urnas blanquicelestes

La inmensa mayoría de las y los argentinos ansía el triunfo de la fórmula opositora encabezada por Alberto Fernández secundado, desde una centralidad política innegable, por la ex presidenta Cristina Fernández. La debacle social producida por el neoliberalismo de una banda delincencial les da la razón.

La victoria del Frente de Todos será producto de la unidad de (casi) todos los sectores (casi) opuestos a las políticas macristas. El doble “casi” expresa el eterno aislacionismo trotskista, cuya razón política suele alimentarse de la autoreferenciación vanguardista, legado del asesinado fundador de esta corriente, Lev “Trotsky” Bronstein. Tampoco forman parte de este frente los gobernadores justicialistas de Salta y Córdoba.

El segundo “casi” hace referencia a un cúmulo de dirigentes, legisladores, gobernadores y hasta organizaciones que, por voluntad propia o por extorsión, apoyó largamente al macrismo o al menos no lo confrontó explícitamente.

Lo cierto es que la unidad de esta configuración política electoral de coyuntura expresa la voluntad popular, hecho que se verá reflejado en el amplio margen (de alrededor de un 20% o más) que resultará de las urnas el domingo 27, concluyendo así con este período nefasto y devolviendo las esperanzas a un hoy asfixiado pueblo argentino. Un pueblo dispuesto a afrontar las consecuencias de sus errores políticos anteriores y “tirar para adelante”.

La unidad de fuerzas que incluye a diversos sectores políticos (de la Teología de la Liberación, de izquierda nacional, comunistas, humanistas, bolivarianos, radicales alfonsinistas, pequeño y mediano empresariado, campesinos, entre otros), está vertebrada alrededor del movimiento peronista. Movimiento cuya estructura se entronca desde sus inicios laboristas con el sindicalismo – en ocasiones más burocrático, otras veces más reivindicativo – y cuenta con una base política significativa de gobiernos provinciales y municipales. Estos gobiernos son los que en provincias y municipios menos favorecidos proveen muchos puestos de trabajo que, combinados con una imprescindible estructura de asistencia social configuran un esquema de poder innegable. De ellos emana un importante caudal de votos y de movilización, pero también contrapeso federalista al omnipresente centralismo portuario heredado de la historia colonial, centralismo que condensa el macrismo en símbolo y presencia política.

A estas formas políticas orgánicas, se agregan movimientos populares, que actúan generalmente en las periferias donde la miseria hace estragos. La combinación de reivindicaciones de urgencia (hábitat, programas de trabajo y autoconstrucción, salarios sociales, fortalecimiento de la economía popular) en conjunto con una multiplicidad de acciones directas de desarrollo humano han proyectado a estos movimientos a constituirse a su vez en columnas importantes de expresión y acción popular.

También han proliferado con fuerza en Argentina otras expresiones orgánicas. Iniciativas y redes feministas, activismos en defensa del medioambiente, coaliciones de comunicación democrática, organismos de derechos humanos, articulaciones de la cultura, que junto a las innumerables actividades sociales, culturales y deportivas tradicionales extienden un mapa orgánico que vertebra en profundidad a la Argentina.

La banda oriental

El caso uruguayo, similar demográficamente al argentino en cuanto a la influencia de la inmigración europea, presenta un mapa político diferente. Uruguay fue pionero en la realización de la confluencia de fuerzas de izquierda con otros sectores progresistas. El Frente Amplio, actualmente en el gobierno, condensa las luchas de trabajadores organizados en la central sindical única CNT (hoy PIT-CNT) y la sedimentación del movimiento estudiantil uruguayo -unido en la FEUU ya desde 1929-. Agrupa en su heterogeneidad el esforzado trabajo político de los partidos de izquierda y del brazo político del MLN-Tupamaros, y a través de la complementación de esfuerzos contra la

dictadura, incluye a algunos sectores colorados y blancos en defensa de las libertades democráticas, de fuerte arraigo en la sociedad uruguaya.

Este entramado permitió al Frente Amplio conquistar sucesivamente territorio político que antes estaba capturado por el batllismo colorado. Sin embargo, la heterogeneidad en su interior, necesaria para la acumulación de fuerzas, constituye no sólo la explicación de su fortaleza sino también de su vaivén ideológico y las contradicciones en su rumbo.

Hoy la disputa política en Uruguay viró a la derecha. Tres mandatos consecutivos en el gobierno del FA, la paradoja de una sociedad avejentada y una juventud en dialéctica con una memoria posneoliberal, propician que la derecha gane terreno con el discurso de la seguridad ciudadana y la antipolítica. Por su parte, el Frente Amplio hace valer el peso de una situación objetiva de relativa estabilidad económica.

El peligro de derrumbe social que muestra Argentina no es plenamente identificado con lo que podría suceder si un ultraliberal toma las riendas, porque el FA emprendió hace tiempo un rumbo poco inquisidor de las estructuras sistémicas. Por otra parte, el giro conservador del mundo y la región también afecta el escenario de los sentidos comunes, restando oxígeno a la agenda progresista, sobre todo si esta resulta desteñida.

La reactivación de la prosapia Lacalle en el Partido Nacional, el intento del Partido Colorado de recuperar o mantener terreno y la reaparición castrense en la escena política bajo la sigla de Cabildo Abierto, en la figura del destituido y ahora procesado ex comandante en jefe del ejército Manini Ríos, configuran la constelación conservadora. Para lograr impedir la continuidad de la coalición progresista en el Ejecutivo, la oposición debería presentar, en una casi segura segunda vuelta, una unidad difícil pero no improbable. Todo indica, sin embargo, que el FA será la fuerza más votada en la primera vuelta, prolongando una probable mayoría legislativa.

Si bien el pronóstico es aún incierto, la activación de la fibra social organizada y quizás los ecos del triunfo frentetodista en Argentina, serán de suma importancia.

De la opresión a la rebelión

Los levantamientos populares se suceden en América Latina y el Caribe, producto de la aplicación de programas fondomonetaristas de dudosa eficiencia fiscal, recorte a prestaciones sociales y aumento del costo de vida. La multiplicación de expresiones masivas de descontento popular se desprende de un contexto globalizado de economía financiarizada que anula las demandas de bienestar social de una población con creciente conciencia de sus derechos.

En Ecuador, el protagonismo inicial del sector transportista y los estudiantes y la imponente movilización indígena posterior encarnaron un reclamo popular que luego se extendió a otros sectores sociales.

En Haití, el grave desamparo humano de un país en manos de una élite corrupta y ocupado militarmente por fuerzas multinacionales, provoca recurrentes alzamientos de la población. La ficción de gobierno democrático que encarna el empresario Jovenel Moise se sostiene apenas por la voluntad de los personeros del "Core Group", compuesto por representantes de la ONU, la OEA, la Unión Europea y las embajadas de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, España y Brasil.

Frente a la ignominia, el proyecto de unidad de agrupaciones campesinas y populares aglutinadas en el Foro Patriótico asume la propuesta de una transformación institucional y económica soberana, sin tutelas externas.

En Chile, los jóvenes estudiantes secundarios -tal como ocurrió en la Revolución de los Pingüinos en 2006- encabezaron la revuelta de la "Evasión masiva" ante el aumento de los pasajes en el transporte subterráneo, concitando el decidido apoyo de la población hastiado ya de una dictadura neoliberal de cuatro décadas.

La fuerte orgánica social chilena que llevó a Salvador Allende a la presidencia y fue destruida o exiliada por el régimen asesino de Pinochet, se ha comenzado a reconstruir. La resistencia se asienta en el estudiantado, en la articulación de sectores sindicales y actores sectoriales contra el expolio medioambiental, el sistema de

pensiones, agrupaciones feministas, de Derechos Humanos y de la diversidad. El agotamiento del bipartidismo como fórmula de conservación ha dado pie además a un conglomerado frenteamplista cuya inserción social será puesta a prueba en las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales (2020).

El pueblo sigue movilizado desafiando la represión y la Unidad Social, un conglomerado constituido por más de cien organizaciones y movimientos sociales, llamó a Huelga General. Además de la exigencia de levantamiento del estado de excepción y descriminalización de la protesta, hay demandas de renuncia gubernamental y vuelve a reivindicarse la convocatoria a una Asamblea Constituyente con participación popular, para relevar a la Constitución impuesta por la dictadura pinochetista en 1980.

Las orgánicas reaccionarias

Tanto en Ecuador como en Chile, como respuesta violenta a la justa protesta, los gobiernos de Moreno y Piñera sacaron el ejército a la calle, decretaron el estado de excepción y el toque de queda propios de épocas dictatoriales.

En Honduras continúa la movilización popular antigolpista liderada por el partido Libre en consonancia con el Partido Liberal y el ex candidato Nasralla, ante la represión de un gobierno ilícito y ligado a mafias del narcotráfico. En Perú el aparato político y judicial está en quiebra. En Colombia, la violencia institucional y paramilitar, el asesinato y amenaza permanente a líderes y lideresas sociales, la concentración económica y el faccionalismo opositor prolongan una agonía popular de décadas. En Brasil un títere sin partido es apenas la fachada institucional de la tutela militar y norteamericana. En Guatemala, el fraude político y la falta de alternativas populares sólidas ahogan de momento las expectativas de cambio, al igual que en el Paraguay.

Las iglesias pentecostales y la jerarquía católica actúan como elementos regresivos decisivos en el sentir de las franjas suabalternizadas de la población. Entre los pliegues de una religiosidad que conecta con el desamparo y la vacuidad de sentido, van envueltos falsos discursos moralizantes y una influencia colonialista que carcomen las posibilidades de reales y profundas transformaciones sociales y humanas.

Por su parte, los medios hegemónicos operan en el campo de la subjetividad con un aceitado sistema de censura, desinformación y tergiversación. Las redes sociales digitales monopólicas se vuelven un campo de disputa comunicacional, en el que junto a indispensables coberturas informativas alternativas, pululan las noticias falsas, el troleo contrainsurgente y los ataques dirigidos.

El aparato de la extrema derecha republicana ha hecho de la guerra multiforme contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y todos los procesos progresistas de América Latina, el centro de sus acciones, junto a una ofensiva agresiva mundial contra las naciones que no obedecen a las pretensiones hegemónicas de la potencia en declive.

El aparato “orgánico” de la acción conspirativa local en América Latina y el Caribe son un conglomerado de fundaciones y organizaciones (¿No?) gubernamentales, financiadas por agencias estadounidenses, que construyen y entrenan liderazgos, operan guerras de sentidos e intrigas contrarias a los procesos emancipadores en la región.

Neoliberalismo, un disolvente orgánico en un mundo en descomposición

Las rebeliones requieren un grupo de activistas disparadores y la adhesión de una amplia mayoría popular alrededor de sentidos comunes simples e indubitables. Las revoluciones, si bien derivan habitualmente de desbordes coyunturales, implican además visiones, liderazgo y una estructura orgánica consistente, capaz de proyectar la inmediatez al mediano plazo y sostener la segura avalancha contrarrevolucionaria del poder establecido.

De allí que el poder sitúe entre sus objetivos primarios aniquilar preventivamente las imágenes de posibles alternativas, descabezar y deslegitimar a las rebeldías y

desestructurar todo posible movimiento que amenace con constituirse en eje de las transformaciones.

El neoliberalismo, lejos de ser sólo un esquema económico, es un vector ideológico que apunta a desconectar al individuo de su medio social, cultivando significados de competencia, acumulación, meritocracia y estratificación social. Esta estrategia, pretende relevar todo componente colectivo indispensable para una transformación social consistente y de cierta permanencia.

Sin embargo, la penetración de esta ideología, que se presenta como némesis de lo ideológico, no se debe solamente a los refinados y omnipresentes dispositivos acuñados para instalarla. Es la desestructuración creciente de la época lo que lo facilita.

La dinámica de un sistema que ha llegado a sus límites planetarios promueve su propia descomposición. La aceleración del cambio tecnológico y sus implicancias chocan con los hábitos y memoria de un conjunto humano con tendencia a la ancianización, abriendo profundas grietas generacionales. Los antiguos lazos pierden consistencia y la fragmentación se expande.

Revolución y recomposición del tejido social

Ante los ojos humanos se evidencia la imperiosa necesidad de nuevos horizontes que recojan lo mejor del trájín histórico anterior y que profundicen la construcción humilde y sentida de “una revolución social que cambie drásticamente las condiciones de vida del pueblo, una revolución política que modifique la estructura del poder y, en definitiva, una revolución humana que cree sus propios paradigmas en reemplazo de los decadentes valores actuales.”

Las revoluciones presentes y futuras habrán de abordar necesariamente entre sus primarios la reconstrucción del tejido social deteriorado. Para hacer frente a la ola de nacionalismos xenófobos, el fundamentalismo, la misoginia, el disciplinamiento social y la exclusión, promovidos por el sistema a través de sus vehículos de derecha, dicha reconstrucción podrá colocar como premisa fundamental de su escala de valores el reconocimiento pleno de la humanidad en cada uno y las derivaciones de este hecho en la vida personal, interpersonal y colectiva.

Este vínculo de humanidad primordial, esta actitud de reconocimiento de una posible “comunidad en la diversidad”, puede representar en el mundo actual un núcleo orientador para avanzar en la lucha por la justicia social, la liberación política y la realización efectiva de los Derechos Humanos para todas y todos.

(Fuente: 21 octubre 2019| Javier Tolcachier. Blog)

CHILE

CHILE EN LLAMAS: EL NACIONALISMO HERIDO DONDE NACIÓ

El estallido social en Chile, que no se detiene a pesar de la marcha atrás del Gobierno con el aumento al transporte, es señal de un malestar mucho más profundo.

No es fácil en estos días escribir sobre Chile, y no porque no haya mucho que decir; por el contrario, ha pasado tanto en tan poco, son tantas las sorpresas, las emociones, los interrogantes. Es tanta la sucesión de hechos, uno más sorprendente que el otro, que no se sabe por dónde empezar.

Tal vez empezar por una frase dicha la semana pasada por el presidente Sebastián Piñera ante la prensa nacional: “Chile es un verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada”. Lo dijo justo cuando comenzaban las primeras “evasiones masivas”, organizadas por los estudiantes secundarios como una respuesta al alza del pasaje del metro, que cuesta ya un dólar. Durante una semana los jóvenes iban a las

estaciones e irrumpían masivamente, saltaban los torniquetes e invitaban a las personas a hacer lo mismo, y no pagar pasaje.

La reacción oficial fue la de siempre, “actos vandálicos, delincuentes, violentistas”, hasta que comenzaron a sumarse a las evasiones los oficinistas, trabajadores, jubilados, etc. Y de las evasiones en el metro se pasó a la superficie, a las calles céntricas, y del centro a los barrios, y de Santiago a Valparaíso, a Concepción, a Iquique ... a todo Chile.

Hoy nuestro país está en llamas. Del “oasis” de Piñera pasamos a un terremoto social de magnitudes desconocidas y difíciles de dimensionar ahora. No está claro hacia donde transita Chile en este momento; todo es muy incierto, sobre todo porque la protesta popular-nacional carece de conducción política. Está claro que fueron los secundarios quienes lograron encender la mecha, pero una vez estalladas las llamaradas, la ausencia de conducción política es evidente.

Es indudable que se trata de jornadas de protesta, de asonadas populares que encarnan el hartazgo con un modelo que ha privatizado y precarizado todo: la salud, la educación, la seguridad social, los servicios básicos, el agua; absolutamente todo esta privatizado en Chile. El nivel de vida es generalizadamente precario, el endeudamiento es altísimo y el 70% de la población gana poco menos del sueldo mínimo, entre otros aspectos. Y todas esas tensiones han estallado con un claro carácter de clasista, pues en el centro de todas las demandas está la injusticia social que ya nadie quiere aguantar, y eso es lo que, seguramente, más preocupado y perplejo tiene al Gobierno. No obstante, a los partidos de izquierda -como los que componen el Frente Amplio (FA)- esta erupción social no los pilla en buen pie, pero, a su vez, puede ser esta también su oportunidad de dar un paso cualitativo en su conexión con los sectores populares. Hiperinstitucionalizados desde que se convirtieron en la tercera fuerza política del país, con 20 diputados y un senador, no han logrado generar tejido social con los sectores populares que hoy ni los necesitan, ni los echan de menos en las movilizaciones. Este tema se viene discutiendo desde principios de año con fuerza al interior del FA. La semana pasada, cuando se inicia el estallido, la dirección de Convergencia Social (uno de los conglomerados importantes que integra el FA) determinó sumarse con toda energía a la protesta social y sus diputados/as han estado en las calles marchando. A su vez, el domingo en que excepcionalmente sesionó el Congreso, los/las diputados/as del FA y del Partido Comunista se negaron a seguir legislando mientras existiera presencia militar en las calles de Chile.

En cuanto al Partido Comunista (PC), este se encuentra en mejores condiciones para la inmersión social. Gran parte de este año ha promovido en el Parlamento la reducción de la jornada laboral a 40 horas (actualmente es de 44), a través de un proyecto de ley impulsado por las diputadas comunistas Carol Cariola y Camila Vallejos; se trata de un proyecto con un claro tinte clasista que tiene aterrados a los empresarios y que este miércoles 23 será tratado en la Cámara de Diputados. El PC - que pidió públicamente que se adelanten las elecciones en el país- ha marchado en estos días sin ser expulsados de las marchas, como sí le pasaría a cualquier otro partido. Rostros conocidos, como el alcalde Daniel Jadue, han marchado con el pueblo en Santiago y se ha enfrentado personalmente con la policía que reprimía brutalmente. Pero no es suficiente para dar conducción a un estallido popular inédito en Chile; violento, radical y masivo, pero sin objetivos claros, excepto el de expresar la rabia social que habita al pueblo chileno, cansado de un sistema que sólo en la imaginación de la elite es el mejor de América Latina.

Por otro lado, la respuesta del gobierno ha sido errática en todo, excepto en el empleo de la fuerza y en la opción represiva: en ese terreno la derecha no se equivoca. Las principales regiones del país (Valparaíso, Santiago, La Serena y Concepción) están bajo Estado de Excepción, y las autoridades civiles cedieron sus funciones a las militares. Los jefes de zona son generales del Ejército y de la Armada. Hay 10.500 efectivos militares y policiales desplegados, y se promete aumentar la dotación. Piñera habló el domingo por la noche. Rodeado de militares su primera frase fue de no

creerlo, “Buenas noches chilenos y chilenas. Estamos en guerra...”. Su frase dejó estupefacto a muchos, y dirigentes de todos los partidos de la oposición la han criticado duramente en las redes sociales. El mensaje es claro, se desecha la salida política y se opta por la militar.

Y si del oasis imaginario de Piñera pasamos al terremoto social, a las 00.00 horas, cuando comenzó el toque de queda, retrocedimos a 1973. Militares patrullando las calles de Chile igual que entonces. Recibidos a escupitajos, gritos y a piedrazos en actitudes de valentía sorprendentes. No sólo eso. La gente se mantiene en las calles a pesar del toque de queda, que ha sido adelantado a las 19 horas en las principales ciudades. Es que la radicalidad del pueblo en la calle es la protagonista de estas jornadas y demuestra la profundidad de la crisis. Cada noche ha sido más violenta que la anterior, y más masivos y ensordecedores los cacerolazos. Sólo ayer domingo hubo siete muertos, en total, al día lunes, van 11 fallecidos. En ese contexto, el Gobierno no logra articular respuesta política. Convocó ese mismo domingo a los representantes de los principales poderes institucionales -Cámara de Diputados, Senado, Poder Judicial, etc.- para mostrar cohesión institucional y hacer un llamado a la calma, denunciando los actos de violencia como actos delincuenciales. No entienden nada y no saben qué hacer ante el caos.

Los movimientos sociales, en tanto –las feministas, el Colegio de Profesores, sector salud, el movimiento No + AFP, los movimientos socioambientales, los estudiantes, etc.- están convocando a una huelga general para esta semana. Si este llamado prospera, la asonada popular adquirirá conducción política (y clasista) y, seguramente, se pondrá en el centro de las demandas el fin de la Constitución de Pinochet, que aún nos rige y protege constitucionalmente todos los abusos neoliberales (como la privatización absoluta del agua). La crisis es mucho más profunda de lo que el establishment siquiera imagina; son días de rebelión, días de insurrección. En el país donde nació el neoliberalismo sus hijos y nietos le están dando una estocada profunda. Tal vez es en el origen donde encuentre su fin el más perverso de los modelos inventados por el capitalismo.

Es domingo. Escribo estas líneas desde Valparaíso, donde ya comenzó el toque de queda; pero en los cerros de mi ciudad suenan cacerolas como no lo hacían hace décadas, y comienzan las barricadas. Todas las formas de lucha están desplegadas. La jornada de hoy fue aun más masiva y radical que la de ayer. Helicópteros sobrevuelan los cerros porteños, y en la improvisada marcha aparece un cartel que dice “Sólo el Pueblo Salva al Pueblo”. Aparecen las llamas, asoma una épica, acecha un sujeto social.

(Fuente: Publicado originalmente en CELAG. Telesur 21 octubre2019)

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE CHILE

Señor Presidente:

Soy Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. No le conozco, ni he mostrado interés en hacerlo. Sí lo he hecho con todos los demás presidentes democráticos de su país, al que tanto quiero. Quizás por el cariño hacia el pueblo chileno y por la defensa que siempre he hecho de las víctimas, mi defensa de los pueblos originarios y de los más vulnerables, he decidido dirigirle esta misiva con profundo dolor e indignación por lo que está ocurriendo en Chile.

Señor Presidente, tal parece que chilenas y chilenos han dicho basta. Y lo están diciendo fuerte y claro. Se trata de un estallido social espontáneo que no está dirigido por partido político alguno. Una simple protesta estudiantil por el alza en el billete de metro, severamente reprimida por la policía, Carabineros de Chile, fue la mecha que encendió la rabia y la ira acumulada durante casi treinta años. Ellos han sido los ejecutores de una medida política ordenada por su gobierno.

Señor Presidente, convendrá conmigo que, debajo del pretendido milagro económico que muchos atribuyen a Pinochet, un modelo de desarrollo mantenido por la transición chilena y la posterior democracia, se esconde el triste récord de ser uno de los diez países más desiguales del mundo, al mismo nivel de Ruanda, según el índice Gini aplicado por el Banco Mundial. Es cierto que en el país existe desarrollo y mucha riqueza, pero sólo para una reducida élite política y empresarial. Así mismo, Chile posee también unas cifras macroeconómicas inmejorables, con un sostenido crecimiento durante décadas, pero con un paulatino y constante empobrecimiento y endeudamiento de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que este año alcanzó su máximo histórico, según la prensa y el propio Banco Central. Su país, señor Presidente, también ingresó hace años en el selecto club de las naciones ricas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como flamante país desarrollado, con altos niveles de productividad y competitividad, pero, nuevamente, a costa de bajos salarios de los trabajadores y de una casi total desprotección social.

Como la máxima autoridad política, usted debe saber que la Constitución que rige actualmente en Chile fue adoptada en plena dictadura militar, mediante la celebración de un referéndum que tuvo lugar mientras los testaferros de Pinochet torturaban, asesinaban y desaparecían a los opositores políticos. Esa Constitución experimentó varias modificaciones para hacer posible la transición y luego la entrada en democracia, y ha sido reformada después en innumerables ocasiones, pero su espíritu y su orientación sigue siendo la misma. No hay un Estado “social” y democrático de Derecho, sino un Estado “liberal” o “neoliberal” o “subsidiario” de Derecho. Ello implica que, salvo excepciones, los servicios públicos del Estado son de mala calidad, pensados para personas de muy escasos recursos o indigentes, por lo que quien quiera acceder a ellos en condiciones adecuadas, debe contratarlos en el mercado. Así ocurre con la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el transporte y con un largo etcétera. Realmente, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos progresistas, no existe Estado de Bienestar. En la lógica neoliberal el Estado debe ser pequeño, lo más pequeño posible, por lo que si alguien quiere acceder a servicios de calidad, debe pagarlos con sus propios recursos, convirtiendo así a ciudadanas y ciudadanos en meros consumidores de servicios privados.

Es por ello, señor Presidente, que en los últimos años se han dejado ver las protestas de estudiantes secundarios y universitarios, de pensionistas, de trabajadores que reclaman un sueldo digno, sin que sus demandas hayan sido debidamente atendidas. Se ha hecho patente el descontento, la falta de expectativas, la indiferencia de las autoridades y sus promesas incumplidas, sumado a millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas, de políticos, incluso del Ejército, del propio cuerpo de Carabineros de Chile y, cómo no, de usted mismo. Usted está acusado de enriquecerse presuntamente en forma ilícita en la dictadura y de evadir impuestos de bienes inmuebles durante treinta años. Todo ello hizo que una leve alza en el precio del metro fuera la gota que rebosó el vaso, unida a una descontrolada y brutal represión policial sobre estudiantes secundarios.

La violencia engendra violencia

Quizás no le guste oír esto, pero usted, como presidente, frente a una protesta social sin precedentes en democracia, y con los neoliberales herederos de Pinochet que gobiernan actualmente el país, no han encontrado mejor salida que implementar una estrategia que conocen muy bien: acudir al Ejército para que los militares nuevamente salgan a la calle a reprimir a la gente.

De más está decir que la violencia engendra más violencia, que no se puede combatir el fuego con gasolina, que con los militares en la calle tarde o temprano habrá heridos graves y más muertos. El ejército no está preparado para controlar el orden público, sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo. Siempre que los militares salen a la calle, incluso si es para “combatir” o “luchar” en una supuesta guerra a la delincuencia, las cosas no han hecho más que empeorar. La delincuencia,

los saqueos y desmanes no cesan, sino que a ellos se suma la violencia estatal, que se ejerce de manera indiscriminada y que luego se oculta de la peor manera para garantizar su impunidad. Pero, señor Presidente, usted y el gobierno que dirige se equivocan de objetivo: El pueblo no es el enemigo sino la víctima, y al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.

“¡Hemos perdido el miedo!”, dicen chilenas y chilenos en redes sociales, “¡Chile despertó!”, es uno de los lemas de este movimiento social espontáneo que ya comienza a organizarse. “¡Esto no ha hecho más que empezar!”, aseguran otros. “¡Tenemos que seguir!”, afirma un campesino al ver cómo ante las protestas, aquel río seco ayer fluye hoy a caudales después de que una importante empresa liberase el agua injustamente arrebatada a quienes subsisten de la agricultura.

Por nuestra parte, seguimos y seguiremos muy atentos a lo que ocurre en Chile. Sepan que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado. No le quepa duda, señor Presidente, que no somos de la opinión del secretario general de la OEA, que echa la culpa de todo lo que ocurre en Latinoamérica a Cuba, Venezuela, Rafael Correa, Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández y de quienes discrepan de la ola neoliberal que nuevamente con el patrocinio del norte, como aconteciera en los años 70, asola el continente. Esta vez no nos vamos a dejar engañar ni humillar por aquellos que de nuevo quieren avasallar y acabar con la resistencia y expresión democráticas del pueblo.

(Fuente: infolibre.es publicada el 23/10/2019)

ECUADOR

PROMESAS Y DISPUTAS POR LA PEPITA DE ORO

Cuando salió el primer barril de petróleo del Oriente del Ecuador, en 1972, se cantó el himno nacional. Se organizó un gran desfile patriótico y la gente se untó las manos con el oro negro. La escena era la imagen misma de la felicidad y la promesa de una nueva era de prosperidad. “Este recurso fundamental, recurso básico jamás el único, nos ayudará para resolver los problemas que a la patria aquejan y particularmente al pueblo ecuatoriano y a esa clase desposeída que se debate en la miseria, en la ignorancia, en el tugurio, en la falta de medios de salud”, decía el General Guillermo Rodríguez Lara (dictador, nacionalista), en el discurso de esa mañana.

Cuarenta años más tarde, en 2012 se firmaba el contrato del proyecto minero Mirador ubicado en la Cordillera del Cóndor, parroquia Tundayme, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe: “Hoy, compatriotas, se inicia una nueva era en el Ecuador. Este es un momento de singular importancia porque damos un salto cualitativo al pasar de la exploración de proyectos a gran escala, al inicio del primer proyecto de explotación de cobre a escala industrial”, decía Rafael Correa, en su discurso. Desde los años setenta del siglo pasado hasta hoy, los gobernantes del Ecuador no han cambiado mucho su discurso frente al petróleo y ahora, frente a lo que consideran otra fuente de infinita riqueza: la minería.

El modelo extractivista y neocolonialista se impone. Con petróleo y minería empresas y gobernantes prometen sacar al país de la crisis, pagar la deuda pendiente con las clases populares, hacer obras de infraestructura, dotar a las comunidades de educación y salud, en resumen, salir de la pobreza y del subdesarrollo.

El modelo económico que se vive, el voraz consumo y la urgencia de recursos para mantener un enorme aparato estatal, exige dinero. Y el dinero que proviene de la materia prima, de los recursos naturales no renovables, como el petróleo y la minería, es tentador para los gobiernos que ven en él la manera más fácil de amortiguar las distintas temporadas de crisis económica.

“Atraer inversiones extranjeras y esperar jugosas ganancias”, para unos. “Pan para hoy y hambre para mañana”, para otros. “No podemos ser mendigos sentados en sacos de oro” repetía en sus múltiples alocuciones, el ex presidente Rafael Correa cuando hablaba de las concesiones mineras y de los bloques petroleros. Para él, la oposición, que se decía contraria a la minería y al petróleo, manejaba un discurso manipulador y falaz. Aseguraba entonces que la contaminación de los ríos no provenía de la minería, sino de los desechos orgánicos que son botados a los afluentes. Entre el 2007 y el 2017 se habló del arranque de la minería a gran escala en Ecuador y de su inserción en el mapa minero mundial. En el 2008, la Constitución y su artículo 4081 fue marco fundamental para la formulación de la nueva Ley Minera del 2009.

El gobierno de Lenin Moreno podrá haberse distanciado en mucho de su antecesor, pero en este tema del extractivismo hay muchas más coincidencias que divergencias. Sus funcionarios están convencidos de que gracias a la minería habrá época de vacas gordas en el Ecuador, para los próximos cincuenta años. Así lo ha asegurado el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar en entrevistas a varios medios de comunicación.

Pero ahí, donde los gobernantes y las empresas ven bonanza y muestran orgullosos el brillo de las pepitas de oro y las vetas de cobre que brotan de las piedras de las montañas, las comunidades ven otra cosa: contaminación de sus principales fuentes de agua, de sus ríos y cascadas; erosión de los suelos, tragedias, deslaves y derrumbes, lagunas teñidas de contaminantes; conflictos y división de las comunidades, desposesión y despojo territorial, irrespeto a los derechos de las comunidades, promesas falsas e incumplimientos y también muertos...

El gobierno quiere convencer a la ciudadanía de su apuesta por la minería a gran escala con el argumento de que, solo así, puede combatir la minería ilegal, esa de la que viven gentes marginales que, por pura necesidad de llevarse a la boca el pan de cada día, aceptan un trabajo con deplorables condiciones de esclavitud moderna, en el que son explotados y además extorsionados, como en el caso de las minas de Buenos Aires en la provincia de Imbabura, causando además un enorme daño ambiental.

Dice el gobierno que, a través de esta nueva política, se combatirá crimen organizado, paramilitarismo, tráfico de oro, trata de personas, trabajo infantil, asesinatos, ilegalidades, precariedad absoluta, violaciones a los derechos humanos, esclavitud sexual, es decir, todas esas cosas que van de la mano de la minería ilegal. Por eso, el slogan del gobierno ecuatoriano reza más o menos así: “Ecuador hacia nueva política minera para un desarrollo sostenible de la actividad y para luchar contra la ilegalidad”.

El gobierno insiste que utilizará tecnología de punta para minimizar el daño ambiental (el mismo argumento con el que se defiende la extracción petrolera Art. 408 Constitución ecuatoriana: Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad (en el Parque Nacional Yasuní) y que se planificará la remediación ambiental una vez que termine la vida útil de los

yacimientos mineros (de la misma manera que cuando se anunciaba la explotación petrolera del bloque 43, ITT (campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini), se pone énfasis en que luego, cuando se vaya la petrolera, todo quedará intacto).

Los argumentos de los que ha echado mano el gobierno van desde la urgente necesidad de recursos (la factura que dicen hay que pagar después del gobierno de la Revolución Ciudadana) hasta el hecho de que no se puede concebir la vida moderna sin minerales (las tuberías, los cables eléctricos, los utensilios de cocina, los vehículos o los celulares). A esos argumentos se contraponen uno contundente: sin agua, no hay vida. Y eso es lo que esgrimen las comunidades, los dirigentes y los grupos anti-mineros.

El gobierno maneja algunas cifras: 53 por ciento de la inversión extranjera directa que registró el Ecuador el año pasado fue para la explotación de minas y canteras; hasta el 2021 la industria minera podría crear 100 mil plazas de trabajo directas e indirectas. En definitiva, el país camina hacia un nuevo boom: el minero, aunque eso signifique tropezar una y otra vez con la piedra del extractivismo cuyas consecuencias son bien conocidas.

Varios proyectos mineros están en la agenda del gobierno. Entre los más grandes: Mirador (Ecuacorriente S.A., empresa china), Fruta del Norte (Lundin Gold, empresa canadiense), el proyecto Cascabel —que se dice es el yacimiento más grande del mundo en cobre, oro y plata— (SolGold PLC, Australia), además de otros proyectos como Llurimagua (Enami, empresa ecuatoriana y Codelco, estatal chilena), La Plata (Toachi Mining, de Canadá), Curipamba (Curimining); Ruta del Cobre (Grupo México), Cangrejos (Odin Mining/Lumina Gold).

Mirador significa 3.18 millones de toneladas de cobre, 3.39 millones de onzas de oro y 27.1 millones de onzas de plata. Fruta del Norte es igual a 5 millones de onzas de oro y 6.88 millones de onzas de plata. Y Cascabel, mucho más, pues la promocionan como la mina más grande del mundo. Con esas cifras potenciales prometen atraer a la inversión extranjera y, con los recursos provenientes de la minería y del petróleo (ITT) el gobierno de Lenín Moreno esperaba obtener el oxígeno suficiente para terminar su periodo sin sobresaltos (sin contar con la creciente resistencia). Para el actual vicepresidente, Otto Sonnenholzner, entusiasta vocero en temas mineros, “donde hay minas habrá minería”.

Las minas y el petróleo son la gran tentación para los gobernantes. Con ellos prometen salir de la pobreza y entrar en el andarivel del desarrollo. Con ellos sueñan, también, mantenerse en el poder. Pero además, se sabe, ambas cosas son una tentación para la corrupción y de eso también ha hablado el viceministro de Minas en la prensa. El gobierno dice tener ante sí el desafío de que el dinero llegue a su destino y no, como ha ocurrido hasta ahora con la plata petrolera, que ha llenado los bolsillos de la corrupción.

Pero esos sueños de El Dorado, como en tiempos coloniales, traen consecuencias; las promesas del encuentro del tesoro, de la pepita de oro de la felicidad, hacen aguas cuando chocan con la realidad. Mientras el viceministro de Minas afirma que “Proyectos de minería a gran escala no quiere decir mayor impacto, mayor destrozo o mayores daños sino una forma operativa” (Programa Hora 25); Augusto Flores, gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de ECSA (Ecuacorriente S.A.), reconoce que “El impacto ambiental será irreversible, va a ser significativo, enorme, porque evidentemente estamos alterando el relieve de la zona. Tenemos un túnel de 1, 4 km que desvía aguas arriba el cauce del río, zonas de bosques fueron intervenidas para asentar el campamento, para el tajo de la mina se removió toda la vegetación... penosamente la esencia de la actividad extractiva es esa” (El Comercio, julio 2019). Mientras el vicepresidente Otto Sonnenholzner reta a los activistas a dejar de usar celulares por una semana, el prefecto del Azuay, Yaku Pérez Guartambel (ex presidente de ECUARUNARI, filial de la CONAIE), lo reta a dejar de tomar agua por una semana. Mientras el gobierno, empresarios y cámaras intentan vender la ficción de la industria moderna, limpia y casi ascéptica, las comunidades que han tenido

participación en la minería no quieren repetir la experiencia. En Río Blanco, por ejemplo, los pobladores denuncian a la minera china Junefield Ecuagoldmining de no haber cumplido con los compromisos laborales ni de mejorar la vida de sus habitantes y de dividir a la comunidad. Su demanda está en la Corte Constitucional.

Aquellas que no han tenido participación han podido ver las desgracias y accidentes producidos como consecuencia de la minería en el mundo (150 muertos y 200 desaparecidos en el Brasil, en Minas Gerais por la ruptura de la represa Brumandinho, ocurrida en enero 2019) y por supuesto también en el Ecuador: en 1983 un deslave acabó con la vida de 200 personas en las minas de Nambija, a donde la sed del oro llevó a cientos de buscadores de oro. Y sin ir más atrás en el tiempo, el 6 de agosto de este año 2019, los anuncios del boom minero y sus bondades coincidieron con una explosión en el sector Malvas, Santa Marianita (Zaruma), en las instalaciones de la empresa minera Goldmins, que cobró la vida de cuatro mineros. Las comunidades también han sentido la presión sobre su territorio que ha sido militarizado y han podido ver la represión contra sus dirigentes.

Algunas piedras (pero no de oro) en el zapato del gobierno

El gobierno enfrenta algunos problemas en este tema que le impiden seguir con sus planes. La resistencia ya no es de unos pocos “ecologistas infantiles”. Nosotros no comemos sopa de dinero” decía Domingo Ankuash, uno de los dirigentes shuar de voz más potente contra la minería. Las comunidades indígenas y campesinas han dado muestras de su rechazo y también de su capacidad de movilización e incluso algunas se han convertido en piedra en el zapato para esos intereses. “Mientras el presidente Moreno llama la atención a la Corte Constitucional y se dirige a ella diciendo que si autoriza mediante cualquier mecanismo parar las explotaciones (que obligaría a pagar una indemnización a las empresas mineras) debe invitar al pueblo a decidir también de dónde saldrán los recursos y cuáles serán las fuentes de financiamiento que reemplazarían los ingresos a los cuales el país debería renunciar (el mismo argumento utilizado para cuando se daba la licencia de explotación petrolera en el Yasuní).

Su discurso es unívoco. Pero las comunidades también tienen su postura y están haciendo efectivo su derecho a la consulta previa, libre e informada, garantizada en la Constitución poniendo así obstáculos a las arremetidas de los intereses mineros.

Girón

Los habitantes del cantón Girón, en la provincia del Azuay, dijeron NO a la minería en las urnas. En las elecciones del 24 de marzo de 2019 ejercieron su derecho al voto y el resultado comprometió a uno de los proyectos mineros apetecidos por lamgold e IMV Metal, llamado Kimsacocha o Loma Larga. Kimsacocha es un complejo de páramos que abastece de agua a la zona y es considerada una reserva hídrica importante en el Azuay con sistemas comunitarios para consumo de agua establecidos desde los años sesenta del siglo XX. Coincidiendo con las transnacionales, Rafael Correa en su momento señaló, que la minería no afectaría el agua para Cuenca, luego de que las poblaciones de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete participaron, en 2011, en un proceso de consulta previa no vinculante donde el 90 % de sus habitantes se manifestó en contra el ingreso de la minería metálica a cielo abierto en la zona. Los pobladores de Kimsacocha se sintieron burlados con es proceso de consulta y lucharon por su derecho hasta la convocatoria a elecciones de 2019. La consulta de Girón sienta un precedente en la resistencia.

Santa Rosa

Los teléfonos celulares ayudan a los comuneros a demostrar su inconformidad con la minería. Con ellos graban videos y postean en redes sociales para mostrar “como nos están matando lentamente”. Esas palabras son de un comunero de Santa Rosa (El Oro), y lo dice mientras se queda congelada en la retina una imagen devastadora: una laguna color naranja oscuro, cuyas aguas sucias rebosan y se desparraman y van a dar al río, principal fuente de agua de la comunidad. La actividad minera se paralizó en

mayo de 2019 por las denuncias de contaminación del caudal que abastece al 85 por ciento de la población. Íntag

La zona de Íntag, provincia de Imbabura, tiene una lucha histórica contra el extractivismo. Íntag es una zona megadiversa de la provincia de Imbabura presionada por la minería metálica desde 1995. Después de haber vencido a la gigante BishiMetals, en 1997, y a Ascendant Copper en el 2008 y lograr la retirada de sus proyectos para la extracción de cobre en la zona, hoy nuevamente enfrentan al propio Estado, a través de Enami-Codelco (esta última empresa estatal chilena). La población sigue alerta ante esta “nueva amenaza extractivista”. En todo este proceso de resistencia, el gobierno no dudó en perseguir a los dirigentes, a quienes considera opuestos a los proyectos de desarrollo. Javier Ramírez, presidente de la Comunidad de Junín, fue acusado de rebelión y sabotaje por supuestamente agredir a un técnico de Empresa Nacional Minera, Enami, para evitar que el equipo de la empresa ingresara al proyecto minero Llurimagua. Ramírez fue sentenciado a 10 meses de prisión en 2015.

Buenos Aires

Cuando desde el Ministerio de Gobierno se ordenó el desalojo a los mineros ilegales de Buenos Aires, también en Imbabura (julio 2019), ya era demasiado tarde: habían destrozado la montaña y ya eran miles de personas acampadas allí, malviviendo de la mina, desde el 2017. La intervención militar y el desalojo de los mineros se produjo cuando el daño estaba hecho. Las minas de Buenos Aires estaban regentadas por gente armada y varios fueron los cuerpos muertos encontrados entre los escombros. El desalojo se produjo cuando se estaba promocionando este nuevo boom minero en todos los medios de comunicación. El gobierno quería mostrar los desastres de la minería ilegal y compararlos con las bondades que ve en las concesiones mineras a grandes empresas.

Por eso apenas ocurrió el desalojo y el estado de excepción, empezaron a visitar Urcuquí los funcionarios de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A. (Ecuador), que tiene la concesión de la zona; y Minbuenarsa, que busca la legalización de los mineros ilegales que estuvieron trabajando en las minas de Buenos Aires. La Hanrine montó ya su campamento, durante los 60 días que duró el estado de excepción. Pero sus pobladores no quieren minería, ni ilegal ni legal y convocaron a un paro (30 de agosto de 2019) y salieron a las calles. Reclaman que la empresa no ha socializado con la comunidad y que están cansados ya de la minería.

Estos son solo unos pocos ejemplos (porque hay más). Donde hay minerales no solo habrá minería, como ha dicho el vicepresidente, sino que habrá conflicto social además de daño ambiental. Marchas y protestas en defensa del agua, comunidades que se resisten, defensores del agua, solicitudes de procesos de consulta a los que tienen derecho las comunidades y declaratorias de zonas libres de minería se multiplican en todo el país. Un día es en el sur de la Amazonía, otro en los páramos. Algunos gobiernos autónomos descentralizados están declarando cantones libres de minería.

Loja, por ejemplo, acaba de firmar una resolución para proteger las fuentes de agua, humedales, bosques y zonas de recarga y regulación hídrica. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, también se pronuncia, rompe el proceso de diálogo con el gobierno y anuncia movilizaciones contra el extractivismo.

Debate urgente

El tema de la minería merece un debate nacional urgente y sincero. La experiencia de despojos territoriales, violencia, atropellos e incluso muertos a causa de la minería, ha fortalecido dirigencias y las comunidades ya no quieren sentirse engañadas por ofertas demagógicas, división de las comunidades, consultas inconsultas o imposiciones.

Cierto: hay riquezas en el subsuelo y hay quienes están a favor de extraerlas porque ven en ello un futuro. Pero el Estado no puede disponer de esos recursos sin tener en cuenta el sitio en donde se encuentran las minas —por lo general zonas sensibles y

ecosistemas frágiles como los páramos o la Amazonía— y lo que esto implica para el medio ambiente, los peligros de su explotación y lo que piensan sus habitantes. La discusión es de fondo: un modelo distinto, alternativas económicas sustentables, participación de las comunidades. La ficción de la pepita de oro que sacará al país de la miseria ya no es suficiente.

Referencias bibliográficas

- Sacher, William, Ofensiva megaminera china en los Andes, Acumulación por desposesión en el Ecuador de la Revolución Ciudadana, Abya Yala, 2017.
- Machado, Horacio, Potosí, El origen, Genealogía de la minería contemporánea, Abya-Yala, 2019.
- Van Teijlingen, Karolien y otros, La Amazonía Minada: minería a gran escala y conflictos en el sur del Ecuador, Editorial USFQ-Abya Yala, 2017.
- Plan V, Ecuador a las puertas del boom minero, julio 2019.
- Línea de fuego, Kimsacocha y la importancia nacional de la consulta popular en Girón, Edgar Isch, marzo 2019.
- Periódicos El Comercio, El Universo, La Hora.
- Vistazo 1248, suplemento Enfoque, agosto 2019.

(Fuente: Milagros Aguirre A.)

HAITÍ

LA CRISIS EN HAITÍ ALCANZA NUEVAS DIMENSIONES

Carente de gobierno y de presupuesto oficial, Haití, un país semi-parlamentario, tampoco tendrá un parlamento válido y en funciones al comenzar el año entrante.

En la séptima semana de protestas, y a cien años del asesinato de Charlemagne Peralta, el héroe de la resistencia a la invasión norteamericana de 1915-1934, las mayorías haitianas se movilizan el día de hoy en todo el país. En la capital Puerto Príncipe marcharán, significativamente, a la embajada norteamericana, denunciando la continuidad de la injerencia estadounidense en los asuntos domésticos de la nación caribeña. Por otro lado el Foro Patriótico, espacio que aglutina a más de 62 movimientos sociales y partidos políticos, se movilizará en siete grandes ciudades repartidas por toda la geografía nacional: Jérémie, Les Cayes, Miragoâne, Jacmel, Port-de-Paix, Hinche y Mirebalais. Las organizaciones populares reclaman, junto a otros sectores de oposición, la dimisión inmediata del presidente Jovenel Moïse y la resolución de la interminable crisis haitiana. Crisis que no deja de profundizarse, alcanzando día a día nuevas dimensiones.

Crisis agrícola y alimentaria

El día 18 de octubre el gobierno haitiano solicitó asistencia alimentaria a los Estados Unidos a través de una misiva firmada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Bocchit Edmond. Dirigida al Secretario de Estado Micheal Richard Pompeo, la carta expresa: «Hago a su país, a nombre del Gobierno de la República, un pedido de ayuda urgente y del soporte logístico correspondiente para su distribución. Esta asistencia podría inscribirse así mismo en el marco del importante programa "Food for Peace"». Y añade, respecto a las políticas estatales en la materia que «los mecanismos establecidos, carentes de los medios financieros adecuados, aún no han producido, infelizmente, los resultados esperados».

El flagelo del hambre alcanza en Haití al 49,3 por ciento de la población, según un informe de la FAO. Hoy en día, la crisis energética en curso, el desabastecimiento de combustibles, la paralización del transporte a nivel nacional y el cierre de mercados,

imposibilita que el campesinado coseche y comercialice su producción agrícola, la que ya comienza a pudrirse en los campos. Consecuentemente, la población rural ve afectado su único medio de subsistencia, a la par que los precios de los alimentos alcanzan precios exorbitantes en las grandes ciudades. Por último, el bloqueo casi permanente de regiones enteras del país y el control territorial de grupos criminales, impide la distribución de alimentos y agua por parte de las organizaciones internacionales que brindan asistencia a las poblaciones más vulnerables.

Sin embargo, diferentes sectores del país alertan sobre la utilización de la crisis alimentaria como una excusa para promover una "invasión humanitaria" del país, dado que la contraparte logística de la ayuda solicitada sería el despliegue de militares norteamericanos en todo el territorio nacional. Cabe recordar que no se trataría de la primera operación de estas características, si atendemos al hecho de que luego del terremoto del 2010, mientras países como República Dominicana, Colombia, Venezuela y Cuba enviaban rescatistas, médicos e ingenieros para socorrer a las víctimas, los Estados Unidos aprovecharon la debacle para ocupar el Aeropuerto Internacional y desplegar a miles de marines por todo el territorio.

Crisis política e institucional

En el presente mes de octubre deberían haber sido realizadas elecciones parlamentarias para renovar las bancas de los senadores del país. Sin embargo, la gravedad de la crisis, la inestabilidad política, y el rechazo unánime a un sistema electoral viciado, fraudulento, y controlado técnica y políticamente por los Estados Unidos y por organismos internacionales, produjeron que la realización de las elecciones no fuera ni siquiera sopesada por el gobierno y las fuerzas de oposición. Cabe destacar que desde la renuncia del ex Primer Ministro Jean-Michel Lapin, Haití carece de gobierno. La propia Constitución establece un régimen híbrido compuesto por un presidente, en el rol de Jefe de Estado, y de un Primer Ministro, encargado de la jefatura de gobierno. Si a esto sumamos el hecho de que las bancas de los senadores vencen en el mes de enero, el país se enfrenta a una profundización dramática de la dimensión política e institucional de la crisis. Carente de gobierno y de presupuesto oficial, Haití, un país semi-parlamentario, tampoco tendrá un parlamento válido y en funciones al comenzar el año entrante. Esto habilitará, de facto, procedimientos aún más discrecionales en la toma de decisiones, dado que el presidente comenzaría a gobernar el país por decreto, sin contrapesos ejecutivos ni legislativos de ninguna índole. La estrategia dilatoria de Moïse y sus aliados norteamericanos consiste en capear el temporal hasta enero, para socavar la de por sí escasa legitimidad del grupo de senadores opositores del Sector Democrático y Popular.

Crisis de seguridad y guerra psicológica

En los últimos días se han desplegado una serie de operaciones de desinformación y guerra psicológica bien orquestadas. En primer lugar, estas maniobras buscaron instalar en repetidas ocasiones la siempre desmentida renuncia del presidente Moïse. El 29 de octubre, en un breve discurso subido a sus redes sociales, éste ratificó su continuidad en el poder y volvió a convocar a un diálogo imposible, rechazado de plano por todos los sectores de la vida nacional. Consumando una extraña contorsión discursiva, e intentando reflotar su antigua imagen de "outsider" de la política tradicional, el empresario bananero comenzó a criticar el sistema político y económico del que es, sin embargo, su más alto representante.

En segundo lugar, diferentes fake news y tweets faltos, atribuidos a líderes de la oposición, al tradicional periódico Le Nouvelliste, y a periodistas reconocidos en el país, buscaron instalar que sectores de la oposición conservadora nucleados en el Sector Democrático y Popular habrían tomado la definición de tomar las armas para forzar la dimisión del presidente. El peligro de estas operaciones de río revuelto es que pretenden estimular la violencia callejera, que lejos de ser intrínseca a las movilizaciones de masas, es monopolizada por sectores criminales ligados al poder

político, tal y como pudimos ver en algunos estremecedores tiroteos que fueron captados por ciudadanos y subidos a las redes sociales en los últimos días. La política de terror mediático sólo puede resultar provechosa para quienes pretenden intimidar a la población para que ésta abandone las calles, o para quienes quieren generar un escenario de guerra civil que de la coartada a una intervención norteamericana que arbitre las disputas entre las diferentes fracciones de la burguesía y la oligarquía nacionales. Los dirigentes de los movimientos sociales han sido muy enfáticos al garantizar el carácter pacífico de las protestas, en rechazar la violencia externa al proceso de movilización popular, y en rechazar todo tipo de intervención odiosa.

(Fuente: Telesur. Publicado 31 octubre 2019)

COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE HAITÍ.

¡Hermanas y hermanos amados en Cristo Jesús!

1. Nosotros, los obispos católicos de Haití, les saludamos con respeto y afecto en medio de la angustia indescriptible que hemos vivido como pueblo y ciudadanos, desde hace más de un mes en el país. Es como si estuviéramos en un estado de guerra fratricida. Hemos llegado ahí por el comportamiento de los funcionarios y líderes elegidos. Ahora no es el momento de proclamar que todos somos culpables. No es verdad. Tampoco decir que condenamos la violencia donde quiera que venga, ella tiene un origen.

2. A pesar de nuestros repetidos llamamientos durante casi dos años, los gobernantes actuales de Haití, los funcionarios electos y los líderes políticos, siguen sordos, gestionando y administrando su poder, privilegios e intereses mezquinos. Mientras tanto, algunos sectores continúan enriqueciéndose a costa de los pobres que no pueden comer ni pagar la educación de sus hijos.

3. ¿Hay violencia más atroz que vivir constantemente en la inseguridad? ¿Hay algo peor que la miseria que quita toda esperanza? Ningún pueblo debe aceptar la miseria, la pobreza y la violencia de manera resignada. Por lo tanto, los más altos funcionarios del estado deben asumir sus responsabilidades para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones del país; son moralmente responsables de la seguridad y el bienestar de la población. Y, en primer lugar, el Presidente de la República. Si el país está ardiendo, es por su irresponsabilidad. ¿Cómo pueden no saber lo que todos saben? Se precisa de una toma de conciencia para medir el alcance de sus fallas acumuladas y sacar las consecuencias. Tienen que actuar ahora para el cambio de vida en Haití, pues, mañana será muy tarde.

4. Pueblo haitiano, unámonos para vencer la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la violencia y todos los gérmenes de muerte. Dios nos creó para la vida, por tanto, tenemos derecho a existir y vivir con dignidad.

5. ¡Que María, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, nos acompañe en este difícil y doloroso viaje por el desierto!

NB. Esta nota emana de la Conferencia de Obispos Católicos de Haití, una institución que no debe confundirse con ninguna otra entidad.

Dado en Lilavois en la sede de la Conferencia Episcopal de Haití el 27 de septiembre de 2019.

Siguen las firmas de los las firmas de los 17 obispos

HONDURAS

LA PRESENCIA DE LA CONTRA EN HONDURAS FUÉ UN PROYECTO IMPERIALISTA.

Hablamos con BERTHA OLIVA, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

En la década de los 80´ había una presencia de la Contra no solamente en la frontera sino también en el escenario nacional. En la capital, Tegucigalpa, el “Hombre fuerte” era el embajador (1981-1984) estadounidense John Dimitri Negroponte. Fue durante esos años cuando toda la sociedad hondureña fue militarizada.

En el vecino país fueron desaparecidos alrededor de 200 hondureños, dirigentes populares y de izquierda. Ella no está sorprendida por las noticias de una infiltración de ex Contras y neo Contras en Honduras. Dice que es parte de un plan imperialista. Sabe, en carne y hueso que la tierra arde cuando un conflicto como el de los 80´ puede repetirse.

“No hay duda que el tema que has traído hoy es un tema que a nosotros nos sacude. Justo porque por la presencia de la Contrarrevolución [nicaragüense] en Honduras es que se dio origen a este comité, esta organización de familiares de desapariciones forzadas. Algunos de ellos, o varios de ellos, fueron detenidos o torturados por la presencia de los contrarrevolucionarios [nicaragüenses] en Honduras. Ellos estuvieron en distintas partes del país con un entrenamiento bestial en contra de la oposición política [hondureña], tanto nacional, local como en la persecución política en contra de la gente que hacía un proceso revolucionario, especialmente en Nicaragua y por supuesto era en la región” [centroamericana].

La doctrina de Seguridad Nacional y la Contra

“Porque la presencia de la Contra acá fue un proyecto imperialista. Fue un proyecto llevado a cabo por el gobierno de aquel momento de EEUU. Era el producto también de la implementación de doctrina de Seguridad Nacional. Lo otro es que la Contra, cuando uno habla de estos sujetos, siempre los ubica en el fronterizo con El Paraíso. Casi siempre cree que ahí hicieron su lugar de operación. Pero estaba en todo el territorio hondureño y por supuesto tenían capacidad de actuar porque tenían toda una logística a su servicio. No eran hechos ni aislados que ellos hacían. Tenían toda una estrategia definida y estaban acá decididos a reprimir para aplastar cualquier proceso revolucionario que se diera”.

“Porque la mayoría de los de los desaparecidos hondureños sí tenían proyectos revolucionarios realmente libertarios. Eran proyectos que soñaban para transformar para hacer una revolución local y además no desconectada con las revoluciones que se estaban generando a nivel de la región. Yo no puedo negar, no puedo decir que nuestros detenidos desaparecidos eran gente de que no se metían con nadie. Claro, ellos sí tenían conciencia política, tenían claramente su diseño. Esa conciencia política les hizo también tener conciencia de clase. Ahí es donde, por supuesto, no estaban aún preparados para enfrentar un ejército mercenario como es la contrarrevolución en nuestro país”.

Dice la incansable luchadora por los DDHH:

“Eso de la Contra lógicamente, cuando uno mira la situación actual del país y que nosotros hemos venido observando le hemos colocado como medular en la opinión pública. Hace quizás unos cinco o seis años atrás nosotros decíamos; Honduras está intervenida. Esas intervenciones no nos gustan porque algo se está gestando para más adelante. O sea, mirábamos venir que había toda una estrategia programática y programada para intervenir desde Honduras y eso alguna gente dice ¿pero porque dicen ustedes que estamos intervenidos?!. Ya hemos visto que en los últimos tiempos aquí hay presencia de la Cruz Roja internacional. ¿Por qué en un país que no está en guerra hay presencia cada vez más fuerte de la Cruz Roja Internacional? ¿Por qué

aquí está la presencia de Acnur si no estamos en guerra? ¿Por qué la presencia de la Acnur?”

“Estamos entonces intervenidos porque la presencia que nunca se ha ido pero que será más visible, digamos, de las tropas militares norteamericanas. Eso es una intervención militar sin parecerlo y sin estar oficializada pero que aquí están. También tenemos la presencia de un Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras. Si le pones a escoger cuáles son buenas y cuáles son malas en intervención, es porque algo tiene preparado. Esa era la lógica nuestra. No evaluaremos si son buenos o son malos. Valoremos que estos cinco elementos que hay en el país es porque algo están planeando para una acción como la que creo que no hemos terminado de ver y la que nos espera en Honduras”.

“Una reedición de los 80’ en la actualidad”

“Eso también nos hace pensar que hay una reedición del pasado, una reedición de los 80’ en la actualidad. De repente quizá con más logística han hecho esas intervenciones con mayor anticipación para que en el momento que sea necesario no las miremos como tal, como algo que no está haciendo nada bueno. Luego nosotros siempre hemos tenido cuidado por algunos temas que se han estado abordando hace unos 6-8 años atrás y con énfasis y focalizado desde el proyecto del gobierno de EEUU a través de la embajada. Aquí, por ejemplo, hay cualquier cantidad de exigencia y hay cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos a nivel nacional por el tema del derecho a la tierra, por defensa de territorio”.

“Pero nos han colocado algunos temas que uno se asusta, no es que se asusta y no es que es anti estos temas. Pero disfrazan un poco toda la tragedia que se vive en Honduras por los altos niveles de militarización como el tema de género. Que se ve clarito pero no es el género como está el género sino los derechos de la mujer que quieren que se pueda potenciar de la manera que ellos lo quieren y no como se necesita y se debe en el país. Otro tema es el tema de la comunidad de los LGTB que lo financian y es impulsado por y acompañado como un tema fundamental en temas de derechos humanos. El otro es el tema de desplazados. Son tres temas que financian así como muy abierto y además con mucha promoción”.

Los gringos no apoyan el derecho a la tierra

“Pero ¿porqué no toman, porque no apoyan el tema de defender el derecho que tienen los pueblos a su tierra, a su territorio? Eso no lo defienden. Eso lo atacan.

– * ¿Como el río y la montaña?

“Todo el tema de recursos naturales, eso no es prioridad” [para EEUU].

– * Por lo cual murió Berta Cáceres.

“Hicieron todo un proyecto de muerte contra Bertha Cáceres. Y yo le digo; eso no se puede quedar así. No podemos en ningún momento poner lo que ya se olvidó cuando se detectó se vio que había un proyecto muy marcado. Y así como ella, ¡cuántos defensores de territorios, defensores de los ríos o del ambiente de bosque han asesinado en nuestro país en los últimos diez años!

El jefe de seguridad del proyecto, Douglas Bustillo llegó durante nuestro reportaje en Río Blanco. Fue teniente del ejército hondureño y fue sentenciado por haber sido uno de siete autores materiales del asesinato de Bertha Cáceres. Primero muerta llegó la protesta de la Embajada por el asesinato de la antiimperialista y amiga de los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y los demás pueblos en lucha en el mundo

“Batallón de Inteligencia 3-16”

En la década del ’80 hubo un escuadrón de la muerte operando en Honduras. El grupo que se llamaba “Batallón de Inteligencia 3-16” [11] fue preparado y formado en una base de aviación aislada en Carolina del Sur en EEUU en circunstancias muy secretas. Ahí fueron formados militares y policías hondureños, seleccionados por el entonces general Gustavo Álvarez Martínez.

El general Gustavo Álvarez Martínez en conversación de uno de los presidentes hondureños más pro-estadounidenses, Roberto Suazo Córdoba durante su instalación en la presidencia el 27 de enero de 1982.

“Los argentinos entraron primero y enseñaron cómo desaparecer, Estados Unidos lo hizo más eficiente”, declaró el sobrino del general, Óscar Álvarez Guerrero en una entrevista concedida el 11 de junio de 1995 al diario estadounidense The Baltimore Sun [12].

Óscar Álvarez fue sindicado como agente de la CIA y un enlace entre la Contra nicaragüense y la CIA durante los 80' mientras era oficial de las FFAA de Honduras. Fue ministro de seguridad en el gobierno derechista de Porfirio Lobo que fue electo presidente en las elecciones impuestas por EEUU el 29 de noviembre de 2009, cinco meses después del golpe de estado militar el 28 de junio de 2009.

En las elecciones en noviembre de 2013 y 2017 fue elegido diputado por el Partido Nacional, un cargo que dejó sorpresivamente el 31 de enero de 2018, solo tres semanas después de haber sido instalado en su curul. La prensa argumentaba razones personales y que se irá a vivir a los Estados Unidos. Sus detractores lo acusaban de ser un enlace con los carteles de la droga y que la DEA tenía las pruebas. “El arreglo” sería que hablara ante las autoridades del país del Norte.

Los integrantes del Batallón de Inteligencia 3-16 fueron los principales responsables de la guerra sucia de la década del 80' en Honduras. Toco el tema con Bertha Oliva que es quizás la más conocedora sobre el tema del 3-16. Preguntamos si 3-16 también tenían un tipo de conexiones con la contrarrevolución nicaragüense. Porque la Contra no solamente figuraba con presencia en la zona fronteriza con Nicaragua sino también tenía presencia prácticamente en toda Honduras.

Que EEUU interviniera militarmente a Nicaragua

En esa época existía otro organismo pero más poderoso que el 3-16; la Asociación para el Progreso de Honduras, APRO. Era constituida por la élite económica, política, social y religiosa de Honduras. Es decir; jueces, la cúpula de los dos partidos Nacional y Liberal, la iglesia evangélica y católica, la cúpula del Estado Mayor de las Fuerzas Militares y policías en Honduras. Esa asociación propuso en 1983, en una reunión con Henry Kissinger, que en ese entonces era asesor político a la administración de Casa Blanca bajo el mando del presidente Richard Nixon, que EEUU interviniera militarmente a Nicaragua para aplastar justamente al gobierno sandinista. APRO trasladaba contras de la zona fronteriza a Casas de Seguridad en la capital, Tegucigalpa y tenía prácticamente todo tipo de respaldo económico, social y de los medios.

– * ¿Había conexiones en esta época entre las FFAA, policía y la inteligencia con la Contra nicaragüense? ¿Cuál es realmente el papel de la embajada norteamericana acá en Tegucigalpa en relación a los ex Contras en la frontera?

“Yo creo que la estructura de la APRO, igual que el “3-16” nunca ha sido desarticulado”.

– * Eso lo vimos en el golpe de estado [2009].

“Lo vimos en el golpe de estado que sólo desempolvó. Ahora está desempolvado y actuando. El que desapareció y murió fue él el principal ejecutor de las medidas, decisiones y políticas que se tomaban en la APRO que fue Álvarez Martínez. De ahí casi la mayoría de los que conformaban la APRO están aún vivos. Ha muerto otro que era un empresario” [Adolfo Ferrari, magnate mediático].

“Pero el tema entonces; APRO está vivo. Si lo miramos en el golpe de estado fue desempolvó lo que habíamos vivido hacía 30 años atrás. Esa sacudida de polvo de los 30 años atrás lo puso a practicar y perfeccionar y estaban entonces todos los actores. No olvidemos que la embajada norteamericana jugó y sigue jugando un papel importantísimo en las decisiones de la democracia y fundamentalmente en lo del golpe de estado. Uno lo dice así como para repetir que en los países que hay golpe es porque realmente hay una decisión, no es al alto nivel de los que tienen los ciclos del

poder político económico y militar en el país, sino la decisión geopolítica. Creo que en el único país que no se dan golpes y en EEUU”.

En Trojes han sido muertos varios ex comandantes de la Contra de los 80’. Es considerado como un nuevo centro de la oposición rearmada antisandinista, igual como en los 80’.

– * Porque ahí no tienen embajada.

“No tienen embajada. Es en el único país que no han dado golpe. Todo eso que se vivió en el golpe fue una reactivación de lo que parecía que estaba archivado de la década de los 80. Hoy a mí me parece que se debe de tener mucho cuidado. Porque sí creo que es ya la presencia y está geopolítica que ve, el abordaje que se le da, por ejemplo, a Nicaragua y se le da a la Venezuela no es el mismo abordaje que se le da para la problemática que vivimos en Honduras. Allá hay dos gobiernos, dos presidentes que han sido legítimamente colocados con procesos democráticos. Hay toda una estrategia para colocar a esos dos países como los máximos violadores de la democracia y de derechos humanos. Pero aquí, hermano, aquí tenemos un régimen, una dictadura con un dictador ilegalmente que tomó el control del poder, que está a diario violando y cercenando todo lo que significa derechos humanos. Pero como se lo están permitiendo va más allá. Está legalizando a través de leyes que realmente eso va a ser terrible si nosotros no le damos una revisión al nuevo código penal procesal. Porque todo va a ser legal, aunque sean graves violaciones a los derechos humanos ya no va a haber forma de decir que es violación porque van a decir que está dentro del código penal. Y esto nos autoriza para actuar de esta manera. Es la realidad que tenemos. Eso también es parte y parte del golpe militar”.

El Contra que asesinó el líder sindical Félix Martínez

“Honduras en la actualidad, así como lo estamos viendo es una bomba de tiempo por todos los sentidos. Es posible volver a haber aquí la presencia de la ex Contra y de la neo Contra. Cofadeh no puede jamás olvidar que nuestros detenidos desaparecidos. Yo le pudiera señalar por ejemplo Félix Martínez, presidente de los trabajadores del sindicato de la Universidad Autónoma de Honduras, SitraUNAH.

Fue asesinado por un Contra llamado “Miguel Ángel Pavón” y fue brutalmente torturado. En el término que se investigó él fue uno de los de los que lo detuvo. Pero además uno de los que participó en los niveles de tortura. Así yo pudiera hablarle de todos donde tuvo participación la Contra que no necesariamente estaban en El Paraíso o que estaban en Trojes. Ellos estaban en Tegucigalpa, otros estaban en el sur del país.

Yo no puedo olvidar los testimonios de la gente como la Contra se paseaba en algunos lugares del sur y a todo lo que era oposición política la agarraba y en algún momento inclusive usaron las calderas donde se queman tejas o se hacen para tirarlos en cenizas o sea en los hornos. Eso no puede olvidar los testimonios de la gente. No porque lo inventa porque era producto también de la presencia que ser un corredor de la Contrarrevolución. No queremos, absolutamente, Cofadeh jamás se prestará a ver como que alguien que viene a armarse para atacar, porque ese también es otro problema. Que se arme o en lo que venga armado o se arme en Honduras para atacar su propio país, su propio gobierno que fue electo democráticamente, eso también es un golpe, son golpes de estado, son golpes que atentan contra la democracia de los pueblos”.

Eliana Ros Lehtinen junto con la cara visible del golpe de estado 2009, Roberto Micheletti! Envío su secretaria especial al sur de Honduras para reforzar los contactos con los re-armados nicaragüenses.

“La Loba” Lehtinen busca rearmar la Contra

El 4 de marzo 2017 la congresista republicana y cubana-estadounidense, Eliana Ros Lehtinen, aterrizó en el aeropuerto Toncontin, de Tegucigalpa. Más tarde publicó una foto en su cuenta de Twitter con el texto [13]: “Que gusto poder reunirme con mi amigo y el ex-Presidente d #Honduras, Roberto Micheletti!”. Micheletti fue la cara visible en el golpe de estado el 28 de junio 2009 y, como Juan Guaidó, se autoproclamó

“presidente” en calidad de presidente del Congreso Nacional de Honduras. Lehtinen saludó al golpista hondureño pocos meses después del golpe de estado y lo respaldó desde el primer día.

Lehtinen fue también un incondicional apoyo y amiga de los Contras de los ‘80’y en esa trocha anticomunista ha continuado. Desde su curul en el Congreso, donde fue diputada desde 1989 hasta el 3 de enero de 2019 en la Cámara de Representantes por Florida, ha tomado muchas iniciativas para frenar o impedir todo tipo de aperturas con Cuba o el campo progresista en el mundo.

En febrero y marzo 2017 la congresista visitó varios países de Centroamérica [14]. Durante la gira, la Sra. se reunió con políticos y empresarios de Honduras, Guatemala, el Salvador y Nicaragua, realizando una fuerte influencia para limitar las inversiones en Nicaragua y de conjunto con la aplicación de la Nica.Act, presionar por cambios políticos en ese país. En su oficina en Washington recibió los opositores nicaragüenses más visibles en el intento de golpe de estado el año pasado como la entonces presidenta del partido neo somocista MRS, Ana Margarita Vijil.

Durante su visita a Nicaragua coordinó con ONGs desestabilizadoras del gobierno y grupos paramilitares armados que operan en la frontera con Honduras, los que le están pidiendo a la Sra. que los apoye con financiamiento y gestión política a su favor.

Buscar fondos para la Re-Contra

Según nuestras fuentes, durante su visita en 2017 a Honduras, Lehtinen coordinó o estuvo en contacto con grupos armados que operan en la frontera Honduras-Nicaragua. También tuvo contacto con varias ONGs de Nicaragua. La petición de los grupúsculos a Lehtinen se trataba de apoyo con financiamiento y gestión política a su favor.

Uno de esos personajes fue el líder de la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense (CGN), el ex Contra, Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como ‘El Flaco’, muerto por la policía en octubre 2013, el mismo mes y año cuando fue detenido en Honduras Marvin Figueroa, alias “Comandante Nicaragua”. Éste estuvo presente en el video presentado por Edgar Montenegro, alias “El Cabezón” el 23 de mayo, 2019, ambos ex Contras de los 80’. El enlace de este grupo guerrillero en EEUU es, al parecer la nicaragüense Rafaela Cory Amador, quien sostuvo contactos con la Sra. Lehtinen en el 2013, cuando militaba en la CNG. También sabemos que la señora ANA NAVARRO, jefa de los asesores y asistentes de Lehtinen se encarga de la búsqueda de fondos para estos grupos.

Según la misma CNG, el grupo fue fundado el 17 de septiembre del 2007. Lo que les interesa a Lehtinen y esos grupúsculos dizque “guerrilla” es hincharse a dimensiones para que sean tomados en cuenta. Las autoridades de Nicaragua los consideran bandoleros o delincuentes.

La información sobre este grupo Contra es escasa. Se dice que fue fundado el 17 de septiembre del 2007, pero solo se pudo encontrar en el sitio web de la golpista Universidad Centroamericana (UCA) [15]

La señora Lehtinen promulgó en 2016, junto con sus aliados de la oposición nicaragüense un proyecto de ley conocido como “Nica.Act” que afectaría todo préstamo realizado por Nicaragua ante organismos financieros donde Estados Unidos tenga poder de decisión.

Víctor Cuadras y Zaida Hernández, dos voceros de la oposición golpista nicaragüense, que con pasajes pagados por Freedom House (el clásico órgano de la CIA para promover golpes de estado en el ex bloque socialista) y agenda preparado por el anticomunista y congresista Marco Rubio visitaron los dos Eliana Ros Lehtinen en su oficina en Washington para pedir ayuda y sanciones contra su propio pueblo. [<http://nicadickema.blogspot.com/2018/11/la-oposicion-de-nicaragua-fraterniza.html>]

Pocos nicaragüenses son aceptados como refugiados en Costa Rica y Honduras

- La migración hondureña otorgó en 2017 refugio a solo un nicaragüense.
- El Gobierno de Costa Rica ha otorgado desde 2018 hasta mayo de 2019, 24 estatus de refugio a nicaragüenses que huyeron después del fracasado golpe de

estado en abril del año pasado. En total han sido 34,827 las solicitudes en este mismo periodo, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica (DGME).

- En 2018 se aprobaron solamente seis (6) de 23,063 solicitudes y hasta mayo de este año fueron 18 de 11,764.

- En abril de este año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que al menos 62,000 nicaragüenses habían huido después que fueron derribados los tranques (barricadas). De esta cifra, 55,000 se fueron a Costa Rica.

- La Migración negó en 2018, 244 solicitudes y en 2019, 1,056. “Esto se debe a que los solicitantes no cumplieron con los requisitos que establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados o que había un interés económico de por medio”, aseguró Raque Vargas, Directora General de Migración de Costa Rica.

- Costa Rica concedió un total de 12,238 permisos de trabajo entre el 2018 y mayo de 2019

(Fuente: La Prensa)

CIRCULA “EL FANTASMA DE HEZBOLÁ” EN LA FRONTERA HONDURAS-NICARAGUA

La guerra mediática en contra de Nicaragua a veces toma expresiones irrisorias. Los medios israelíes denunciaron en abril 2014 que aproximadamente 30 miembros de la Resistencia Islámica de Lebanon, más conocida como Hezbolá se habían concentrado en una supuesta base en la frontera Honduras-Nicaragua, “preparándose para ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes”.

El diario hondureño El Heraldo, citando medios israelíes informaba el 7 de abril 2014 que “Hezbolá habría establecido una base de entrenamiento en Nicaragua, cerca de la frontera sur de Honduras” [16].

“Irán ha establecido una base de entrenamiento en el norte de Nicaragua, cerca de la frontera con Honduras, que es utilizada por Hezbolá”, informó Radio Israel.

En su guerra psicológica los medios sionistas reportan que las bases sirven como punto de encuentro con el crimen organizado y los carteles de la droga, para el lavado de dinero y contrabando de armas.

“Las fuentes estiman que los entrenados se preparan para ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes, en posible represalia contra un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán”.

Aparte que las declaraciones son totalmente ridículas y fantasiosas, son partes de un montaje en contra del gobierno sandinista que le sirve a la oposición derechista regional y a Washington. Porque los medios denuncian, sin presentar una sola prueba, ni siquiera indicios, que Irán y Hezbolá están involucrados “en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales en Sudamérica, a través de bases iraníes en Nicaragua y Venezuela”.

¿Dónde se encuentran los “objetivos estadounidenses e israelíes” en la frontera nica-hondureña que en gran parte es de selva y montaña con asentamiento de fincas cafetaleras, poblados por campesinos pobres?

El diario hondureño El Heraldo fue un enemigo político en contra del presidente Manuel Zelaya. Después que fuera derrocado sostuvo campañas en donde acusaba al Frente Nacional de Resistencia en Contra del Golpe de Estado y al movimiento sindical de recibir financiamiento de las FARC, que Hezbolá y guerrilleros sandinistas, venezolanos y cubanos se encontraban en el Bajo Aguan en donde los campesinos organizados luchaban por una reforma agraria.

Hasta el día de hoy, no ha sido capturado ningún “guerrillero” de los mencionados grupos o países y menos existió prueba que la guerrilla colombiana había entregado dinero a la resistencia antigolpista en Honduras.

Revisión de textos: Nechi Dorado

Fuentes:

[12] Óscar Álvarez Guerrero en una entrevista concedida el 11 de junio de 1995 al diario estadounidense The Baltimore Sun: Honduras, Álvarez, “admite técnicas de tortura al extinto batallón 3-16”, fundado por su tío.

<https://www.quienopina.com/2017/02/honduras-oscar-alvarez-admite-sin-ambages-tecnicas-de-tortura-al-extinto-batallon-3-16-fundado-por-su-tio/>

[13]: “Que gusto poder reunirme con mi amigo y el ex-Presidente d #Honduras, Roberto Micheletti!”. Eliana Ros Lehtinen publicó una foto en su cuenta de Twitter con el golpista hondureño Roberto Micheletti y esposa.

<https://twitter.com/roslehtinen/status/838050485408043010>

[14] sábado, 15 de julio de 2017: ¿Ros-Lehtinen intenta crear un nuevo grupo de Contras en Nicaragua?

<https://nicadickema.blogspot.com/2017/07/ros-lehtinen-intenta-crear-un-nuevo.html>

[15] Armados con motivos políticos: una tragedia que se repite. Por Roberto Cajina. Revista Envío, número 413, agosto 2016 de la Universidad Centroamericana – UCA, cómplice en el intento de golpe de estado en Nicaragua 2018.

<http://www.envio.org.ni/articulo/5222>

[16] “Hezbollah habría establecido una base de entrenamiento en Nicaragua, cerca de la frontera sur de Honduras”. Por El Heraldo, 7 de abril 2014.

<https://www.elheraldo.hn/sucesos/620277-219/hezbollah-entrena-en-frontera-honduras-nicaragua>

teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección

MÉXICO

ENTREVISTA A MARICHUY- DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIDERESA INDIGENA

Es la primera vez que la lideresa indígena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, dirigente del Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, visita Euskadi. Al pasear por las estrechas calles del Casco Viejo bilbaíno no puede evitar acordarse del famoso Callejón del Beso de Guanajuato, una callejuela de su país en la que, según cuenta la leyenda, dos amantes cuya relación estaba prohibida podían comunicarse sin que los vieran, gracias a la cercanía de los balcones de ambas casas. Marichuy visitará algunas ciudades de España, como Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Madrid donde ofrecerá charlas en universidades y asociaciones en las que tratará temas como la vulneración de derechos que sufren las comunidades indígenas en México, lucha que encabeza desde hace años y que el año pasado la llevó hasta la precandidatura a la Presidencia en las Elecciones Federales de México, convirtiéndose en la primera mujer indígena en presentarse para el puesto. A pesar de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) respaldase su precandidatura, no logró reunir las firmas suficientes para posicionarse como una de las candidatas a la presidencia, que tras una polémica campaña terminó en manos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Cómo se vive actualmente el zapatismo en México?

Ellos se siguen organizando, sigue creciendo su organización desde abajo. Hombres, mujeres y niños. Hasta nosotros los pueblos indígenas nos sorprende cuando van caminando poco a poco, no salen en los medios, no se les ve, pero ahí están, ahí siguen construyendo. Aquí me han preguntado que si es un grupo armado y mi

respuesta es que aunque declararon la guerra al Gobierno en el 94, ellos decidieron que el camino correcto no era por esa vía. Ellos son parte del CNI y eso a los pueblos indígenas de México nos demuestra que se puede lograr esa organización que a veces consideramos imposible. Se puede construir un gobierno realmente desde abajo y a la izquierda.

¿Qué supuso para usted y para su país que una mujer indígena lograra ser precandidata a las Elecciones Federales?

Participar en las elecciones de 2018 fue un pretexto no para ocupar la silla presidencial, sino para lograr visibilizar la problemática de nuestros pueblos indígenas y también ir acercándonos a los diferentes pueblos, barrios, colonias para mostrar que la única manera de ir construyendo este gobierno realmente desde abajo es mediante la organización. Esa fue la idea de participar en el proceso electoral, decidimos meternos en "la fiesta de los ricos", porque la consideran suya y se pasan el poder de mano en mano, por eso decidimos usar sus mismas armas para cumplir nuestros objetivos. Por eso se lanza esta propuesta y se decide conformar el Concejo Indígena del Gobierno, que es representativo de los pueblos a través de una concejala. Generalmente los puestos de arriba son para hombres, pero esta lucha que vamos construyendo desde abajo tiene que incluir mujeres, tiene que ser de manera igual. Si vemos que algo está mal es el pueblo quien debe, desde una forma organizativa, ser quien manda y el gobierno quien obedece.

¿Y lograron ese objetivo de visibilizar las problemáticas de las comunidades indígenas?

Aunque no reunimos todas las firmas, yo creo que sí se logró. Muchos nos tomaron de ejemplo. Al principio nos decían "¿cómo si ustedes son minoría quieren aparecer"? Y nosotros decíamos "¿y por qué no?". Es lo que falta, que el pueblo de abajo, los trabajadores del campo y de la ciudad no se sientan menos. Que veamos que tenemos los mismos valores y derechos. Nuestra dignidad es lo que nos tiene que tener con la frente en alto, porque ya basta de tanto rechazo, de tanto abandono, olvido, humillaciones que han tenido nuestros abuelos y abuelas. Por ellos yo creo que vale la pena luchar y decir que hay otras formas de comunicarnos, de relacionarnos, para ir construyendo esta nueva forma organizativa.

AMLO ha logrado llevar a la izquierda al poder por primera vez desde que se estableciera la democracia, en el año 2000. En su campaña criticó las reformas estructurales de los últimos 25 años y declaró el fin del "período neoliberal" en México.

¿Cómo valora hasta ahora el mandato su mandato?

Para los pueblos no ha habido mucho beneficio desde que llegó. El cambio que aseguró cuando tomó el mando, nosotros vemos que no es cierto, ha sido todo lo contrario. Se han agudizado los problemas en las comunidades, ha habido más muertos, más desaparecidos, más represión. Los intentos organizativos, el levantar la voz para decir "no estamos de acuerdo" con la intrusión de estos megaproyectos pues ha derivado, entre otros ataques, en febrero en el asesinato de nuestro compañero Samir Flores, que era miembro del CNI y él decía que su comunidad no estaba de acuerdo con la toma eléctrica que quería imponer el Proyecto Integral Morelos y ¿qué pasó? lo asesinaron en la puerta de su casa. Eso fue una declaración de guerra a los pueblos para que no hablen, no se organicen y dejen pacíficamente las puertas abiertas para que se metan los megaproyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que arriba se dice una cosa y abajo otra. No solo Morelos, también Puebla, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo es una franja donde van a imponer diferentes megaproyectos como gasoductos, hidroeléctricas, eólicas o el tren maya. La gente ha dicho que no quiere eso, que no está de acuerdo, porque lo que va a traer es destrucción de la vida, de la tierra, los bosques, las aguas, los animales y también va a lesionar la organización de las comunidades, porque habrá en algunas comunidades que tendrá que partirlas, pasar por encima de sus bosques y sus aguas. Dicen que va a traer un beneficio ¿pero beneficio para quién? Las comunidades saben que para ellos no. Por eso creemos que no está escuchando a la gente de abajo ni le interesa escuchar.

Creemos que ya ha hecho un acuerdo de ceder esas tierras para los que quieren invertir en esos proyectos.

En México el tema del colonialismo es algo muy delicado, en España el 12 de octubre es Fiesta Nacional. ¿Qué supone para usted esa fecha?

Yo lo voy a explicar desde el punto de vista de los pueblos indígenas de México. En España a ese día lo llaman el descubrimiento de América, en México lo llamamos el desangramiento de América, porque fue cuando llegaron y hubo masacres, hubo asesinatos, hubo manera de imponer algo desde fuera. Ellos llevaban, o al menos nosotros así lo vemos, una cruz en una mano y en la otra una espada y si no te convencían, te obligaban. Pero no es algo que haya acabado, lo que comenzó el 12 de octubre se sigue reproduciendo con la imposición de los megaproyectos, porque también es una forma de colonizarnos, porque son proyectos que traen muerte. En la escuela nos enseñaron que los indios eran unos salvajes y eso no es cierto. Las comunidades tienen y tenían su forma de vida. Llegaron buscando oro y plata y es lo mismo que está ocurriendo ahora, lo que no se acabó entonces lo quieren acabar ahora, es muerte, es represión. Entonces ¿qué vamos a celebrar nosotros? Sí que nos hacían creer en las escuelas que era bueno, que traían beneficio a nuestra tierra, pero ¿qué beneficio, si nos mataron a nuestra gente? Nos robaron nuestro oro, nuestra plata, eso no es traer beneficio.

En México, a pesar de que gobierne la izquierda, como comenta, hay comunidades en los pueblos que no se ven representadas. En España, la izquierda no ha conseguido formar Gobierno. ¿Por qué cree que cuesta tanto un gobierno real de izquierdas?

Hay gente que está organizándose, luchando, y a medida que se proponga, y yo creo que lo van a lograr. Llega un tiempo en que ya de plano la gente dice "hasta aquí", y es cuando el agua ya está llegando al cuello. El problema es que cuando hay una vida cómoda es cuando uno deja de lado la ideología. Si sentimos que hay cosas que están mal y que quisiéramos cambiar, hay que empezar a buscar esas alianzas, porque a veces parece imposible que uno solo pueda hacer todo. A medida que vamos caminando y vamos encontrando más compañeros y compañeras que van coincidiendo con nuestros ideales, con nuestra lucha, se va a ir creando una organización de izquierda, una organización desde abajo y a la izquierda, pero no simulando que son de izquierda para luego a la hora de la verdad mostrar que son de derecha. No, tiene que irse construyendo realmente desde abajo y eso se puede aplicar a cualquier país.

(Fuente: Marialen Ferreira. Eldiarionorte. Euskadi.)

VENEZUELA

MACRI RECONOCE COMO EMBAJADORA A LA REPRESENTANTE DE GUIDÓ

El gobierno de Mauricio Macri ha anunciado con bombos y platillos el reconocimiento de Elisa Trotta Gamus como "embajadora" del autoproclamado presidente encargado de Venezuela en Argentina.

Mientras nos encontramos en una América del Sur convulsionada por las crisis políticas de los aliados a los EE.UU., en el Perú, Martín Vizcarra, disuelve el Parlamento y éste lo destituye generando una lucha de poderes, en Ecuador las masas indígenas y los trabajadores se levantan contra el "paquetazo" del FMI anunciado por Lenin Moreno, el papelón en la ONU del presidente colombiano Iván Duque entregando un informe sobre la supuesta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela con fotos falsas, Bolsonaro en Brasil con su popularidad en picada y la economía al borde de la recesión, el presidente argentino en retirada, Mauricio Macri, reconoce como embajadora de Juan Guaidó a Elisa Trotta Gamus, desconociendo los más elementales principios legales de la diplomacia internacional.

En medio de la campaña electoral de las elecciones presidenciales a llevarse a cabo el 27 de octubre, con encuestas que lo dan como perdedor en primera vuelta, Macri apura las decisiones con las que pretende condicionar el accionar del nuevo gobierno, siguiendo el libreto escrito desde la Casa Blanca.

El candidato Alberto Fernandez y posible nuevo presidente, en el debate realizado el domingo, afirmó que “Venezuela tiene problemas, pero a diferencia del Presidente yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema”. Agregando que Macri está preparando la ruptura de relaciones para “poder intervenir”. “Espero que ningún soldado argentino termine en tierras venezolanas”, reclamó.

Anteriormente Fernandez comunicó que en un eventual gobierno suyo saldría del denominado “Grupo Lima”, lo que significaría una nueva derrota de la diplomacia norteamericana contra Venezuela.

¿Quién es Elisa Trotta Gamus?

Elisa Trotta tiene doble nacionalidad es argentino-venezolana, reside en Argentina desde el año 2011, de profesión abogada, es funcionaria de la gobernadora María Eugenia Vidal, siendo su directora de Asuntos Institucionales en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Es directiva del partido opositor Alianza por Venezuela, de dudosa financiación, siendo su función la de asesorar a venezolanos que quieran emigrar al país.

Hija de un argentino, preso político y ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, exilado en 1975 y de madre venezolana con filiación comunista, ella se relacionó con la derecha conservadora por influencia de una tía. La ilegalidad del reconocimiento

Teniendo en cuenta el derecho internacional, el gobierno argentino no puede desconocer la legitimidad de la delegación diplomática del gobierno de Nicolás Maduro porque no ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela ni las ha bajado a nivel consular.

A nivel internacional la ONU reconoce como gobierno legal y constitucional al de Nicolás Maduro, los que lo hacen con Guaidó son una ínfima minoría, por lo tanto, las firmas reconocidas en todos los trámites internacionales migratorios son las de los actuales funcionarios encabezados por el ministro consejero Juan José Valero Nuñez Encargado de Negocios de la administración de Maduro, Trotta no puede firmar absolutamente nada, ni otorgar visas ni convalidar trámites consulares.

De acuerdo a las leyes internacionales y de Venezuela, Elisa Trotta debería renunciar a su nacionalidad y residencia argentinas para poder ejercer el cargo, además de renunciar a las funciones que desarrolla como empleada política del partido del presidente Macri en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, cosa que no hizo.

Tampoco se cumplieron con los requisitos jurídicos formales de la diplomacia, como los de presentar al país donde se cumplirán las funciones los avales del Presidente, Vicepresidente y Canciller del país de origen, ya que estos son cargos que Guaidó no tiene.

Conclusiones

Las medidas de bloqueo económico y financiero del gobierno de Trump para derrotar y destituir a Nicolás Maduro e instalar una presidencia títere en Venezuela con el objetivo de apoderarse fundamentalmente del petróleo y dismantelar también los acuerdos del ALBA, impulsados por Cuba y Venezuela, han fracasado notoriamente, aunque compliquen la vida cotidiana del pueblo venezolano.

La pérdida de credibilidad de dos de sus más notorios políticos latinoamericanos utilizados contra la revolución bolivariana, Luis Almagro y Michel Bachelet, el tembladeral que se ha producido en el denominado “Grupo de Lima”, la posibilidad cierta de triunfos en las próximas elecciones del Frente Amplio en Uruguay, del Frente de Todos en Argentina y el MAS en Bolivia, lleva a los EE.UU. a mover alguna carta con alguna repercusión política, para lo cual utilizó al devaluado Mauricio Macri en

este verdadero mamarracho jurídico que significa reconocer a la embajadora del deslucido Guaidó, incluso sin cubrir las apariencias.

Esta medida siempre tiene como posibilidad la decisión de lograr por otros medios lo que legalmente es imposible, para que Trotta se haga cargo de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, deberían desalojar por la fuerza a sus legítimos ocupantes, un acto de desesperación política a solo dos semanas de las elecciones presidenciales, un hecho que no debemos descartar, ya que hoy el imperio está muy nervioso al ver que no consolida su proyecto de recolonizar lo que consideran su “patio trasero”, y Macri desesperado.

(Fuente: <https://capac-web.org/macri-reconoce-como-embajadora-a-representante-de-guaido/>)